

Diciembre 14 de 1954

47ª REUNION — 6ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del contraalmirante (R.) ALBERTO TEISAIRE, vicepresidente de la Nación,  
y del ingeniero ALBERTO J. ITURBE, presidente provisional del Honorable Senado

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

SENADORES PRESENTES:

ALBARINO, Ramón A.  
AMADO, Elias Teodoro F.  
ANGULO, Rodolfo Antonio  
ANTINUCCI, Atilio  
BAZÁN, Miguel Angel  
BRISOLI, Blas  
CALVIÑO DE GÓMEZ, María Rosa  
CASCO DE AGUER, María del Carmen  
CASTANEIRA DE BACCARO, Hilda Nélida  
CORREA, Antonio Eduardo  
CORRECHÉ, Susana  
DE PAOLIS, José Guillermo  
DI GIROLAMO, Elena  
DURAND, Alberto  
FERRARI, Juan Antonio  
GIMÉNEZ, Francisco  
GRAZIANO, Alberto A.  
HERRERA, Paulino B.  
IBARGUREN, Prudencio M.  
ITURBE, Alberto J.  
JUAREZ, Carlos A.  
LUCO, Francisco R.  
NAVARRO, Ramón M.  
PIERANGELI VERA, Humberto  
PINEDA DE MOLINS, Ilda Leonor  
RIERA, Fernando  
RUIZ VILLASUSO, Eduardo Pio  
VELAZCO, J. Filomeno  
XAMENA, Carlos  
ZAVALA ORTIZ, Ricardo

AUSENTE, EN MISIÓN ESPECIAL:

LARRAURI, Juana

AUSENTES, CON AVISO:

RODRÍGUEZ LEONARDI DE ROSALES, Elvira E.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo:  
—Solicita acuerdos. (Página 1120.)

II.—Comunicación de la Honorable Cámara de  
Diputados. (Página 1120.)

III.—Comunicación de la Presidencia del Ho-  
norable Senado. (Página 1124.)

IV.—Despacho de Comisión. (Página 1124.)

2.—A moción del senador De Paolis se fija el asun-  
to a considerar en esta sesión. (Página 1124.)

3.—Consideración del despacho de la Comisión de  
Legislación General y Asuntos Técnicos en el  
proyecto de ley, en revisión, que introduce mo-  
dificaciones al régimen de los menores y de la  
familia. Se aprueba. (Página 1124.)

4.—Apéndice:

I.—Sanción del Honorable Senado. (Página  
1145.)

II.—Comunicación del Poder Ejecutivo. (Pá-  
gina 1145.)

—En Buenos Aires, a catorce días del  
mes de diciembre de 1954, a la hora 9 y 50,  
dice el

Sr. Presidente (Iturbe). — La sesión está  
abierta.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Iturbe). — Por Secretaría se  
va a dar cuenta de los asuntos entrados.

por un plazo que no exceda de diez años, sin perjuicio de la partición temporaria del uso y goce de los bienes entre los coparticipes.

Si hubiese herederos incapaces, el convenio concluido por sus representantes legales, no tendrá efecto hasta la homologación judicial.

Estos convenios podrán renovarse al término del lapso establecido.

Cualquiera de los herederos podrá pedir la división, antes del vencimiento del plazo, siempre que mediaren causas justificadas.

Art. 53. — Cuando en el acervo hereditario existiere un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o de otra índole tal que constituya una unidad económica, el cónyuge superviviente que lo hubiese adquirido o formado en todo o en parte, podrá oponerse a la división del bien por un término máximo de diez años.

A instancia de cualquiera de los herederos, el juez podrá autorizar el cese de la indivisión antes del término fijado, si concurrieren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justifiquen la decisión.

Durante la indivisión, la administración del establecimiento competirá al cónyuge sobreviviente.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará igualmente a la casa habitación construida o adquirida con fondos de la sociedad conyugal formada por el causante, si fuese la residencia habitual de los esposos.

Art. 54. — La indivisión hereditaria no podrá oponerse a terceros sino a partir de su inscripción en el registro respectivo.

Art. 55. — Durante la indivisión autorizada por la ley, los acreedores particulares de los copropietarios no podrán ejecutar el bien indiviso ni una porción ideal del mismo, pero sí podrán cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación correspondiente a su respectivo deudor.

Art. 56. — En los casos de indivisión de bienes hereditarios situados en la Capital Federal o territorios nacionales, la Dirección General Impositiva, a pedido de los interesados, acordará plazos especiales para el ingreso del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, sin interés, con o sin fianza, los que en ningún caso excederán del término fijado a la indivisión ni de cinco años, si dicho término fuera mayor. Si la división de la herencia tuviere lugar antes de que transcurran los plazos indicados, éstos se considerarán vencidos y el saldo de impuesto que se adeudare deberá ingresarse dentro del mes siguiente a aquel en el cual se hubiere producido la división.

El Poder Ejecutivo nacional gestionará de los gobiernos provinciales el otorgamiento de franquicias análogas a las establecidas en este artículo.

Art. 57. — La presente ley comenzará a regir a los noventa días de su publicación, quedando a partir de entonces derogados los artículos 36, 37, 38 y 39 del Código Penal y todas las disposiciones que y en cuanto se opusieren a ella.

Art. 58. — Comuníquese al Poder Ejecutivo

Dios guarde al señor presidente.

ANTONIO J. BENÍTEZ.  
Eduardo T. Oliver.

Este proyecto de ley ha sido girado directamente a la Comisión de Legislación General y

Asuntos Técnicos, en virtud de la autorización conferida a la Presidencia en la sesión del 19 del corriente.

### III

#### Comunicación de la Presidencia del Honorable Senado

**Sr. Secretario (Reales).** — La Presidencia informa que con fecha 13 del corriente ha comunicado al Poder Ejecutivo la sanción definitiva del proyecto de ley por el que se introducen modificaciones al régimen impositivo nacional (1).

### IV

#### Despacho de comisión

**Sr. Secretario (Reales).** — La Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos ha producido despacho en el proyecto de ley, en revisión, sobre modificaciones al régimen de los menores y de la familia.

Este proyecto de ley ha pasado directamente al orden del día, de acuerdo con el artículo 90 del reglamento del Honorable Senado.

### 2

#### MOCION FIJANDO EL ASUNTO A CONSIDERAR

**Sr. De Paolis.** — Pido la palabra.

Hago moción para que en la sesión de hoy se considere el orden del día número 100, que contiene el despacho de la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos en el proyecto de ley, en revisión, que introduce modificaciones al régimen de los menores y de la familia.

—Apoyado.

**Sr. Presidente (Iturbe).** — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Mendoza.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Iturbe).** — Así se procederá.

### 3

#### MODIFICACIONES AL REGIMEN DE LOS MENORES Y DE LA FAMILIA

(Orden del día número 100)

**Sr. Secretario (Reales).** — (Leyendo):

#### Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos ha considerado el proyecto de ley, en revisión, sobre modificación a las

(1) Véase el texto de la nota en el Apéndice.

normas en vigor que rigen el régimen de los menores y de la familia; y, por las razones que dará su miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del reglamento, el presente despacho pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 14 de diciembre de 1954.

*Guillermo De Paolis. — Carlos A. Juárez. — Elena Di Girolamo.*

### **Sanción de la Honorable Cámara de Diputados**

(14 de diciembre de 1954.)

#### **PROYECTO DE LEY**

—El texto del proyecto de ley es el mismo que se publica en la página 1120.

#### **ANTECEDENTE**

#### **Mensaje del Poder Ejecutivo**

Buenos Aires, 8 de diciembre de 1954.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, remitiéndole el adjunto proyecto de ley que introduce modificaciones a las normas en vigor abarcando, directamente o indirectamente, distintos aspectos del régimen de los menores y de la familia.

I. — Es bien conocida la constante preocupación del gobierno por los problemas del niño, de quien ha predicado que es el único privilegiado en nuestra tierra. Y esto es así, porque esos niños de hoy han de ser los hombres del mañana, es decir, el sector principal de ese capital humano que constituye el factor básico de la organización social.

El segundo Plan Quinquenal, aprobado por ley 14.184, fija, a través de varias enunciaciones, la importante acción estatal a realizar, dirigida al perfeccionamiento de la niñez y de la juventud. Si esto es así con referencia, en general, a ese núcleo de nuestra población, se comprenderá por qué ha desplegado mayores energías y está dispuesto a desplegar el gobierno para redimir a los niños y jóvenes que, tal vez llevados por un ambiente familiar o social nocivo, cayeron en infracciones antijurídicas.

Si los padres manifiestan su mayor afecto por sus hijos débiles y enfermos, también los gobernantes deben poner el acento en las medidas de tutela, socorro y protección destinadas a los ciudadanos moralmente debilitados, especialmente cuando son niños y jóvenes.

La idea que priva en el proyecto —artículos 1º a 13— es la de substraer a los menores del Código Penal, para ser sometidos a un régimen especial, adecuado a las modalidades de cada uno, destinándolos, cuando correspondiera, a establecimientos asistenciales y educacionales.

Excluir al menor del ámbito penal, constituye un postulado de la Doctrina Nacional: esa etapa de la

vida humana, con los complejos problemas que plantea, debe ser considerada y resuelta de acuerdo con principios e instituciones específicas, formadas en los moldes del Justicialismo peronista.

Las disposiciones legales que se proponen sintetizan principios de fondo aplicables a la materia y constituyen un anticipo a la reforma integral que sobre el régimen de la minoridad se tiene a estudio y se elevará oportunamente a la consideración del Honorable Congreso.

II. — Se considera impedimento por la ley de matrimonio civil, sancionada el 12 de noviembre de 1888, no tener la mujer doce años cumplidos y el varón catorce. Siendo que el matrimonio no consiste sólo en la posibilidad de procrear, sino que supone un conjunto de responsabilidades y una conducta de cada cónyuge frente al otro y de ambos frente a los hijos y a la sociedad, que difícilmente pueda darse en edad tan temprana, el proyecto la eleva a catorce y dieciséis años, respectivamente.

Nuestra ley en vigencia adopta las más bajas edades, que eran las fijadas en el derecho romano y en el antiguo derecho canónico y que coinciden, generalmente, con la posibilidad fisiológica de la generación.

El código suizo —artículo 96— exige veinte años para el varón y dieciocho para la mujer. En Francia, dieciocho y quince años; en Finlandia, dieciocho y diecisiete. El código alemán, veintiuno y dieciséis, permitiendo la dispensa de edad para el primero siempre que tenga más de dieciocho años. El código del matrimonio y la familia ruso, dictado en 1926, exige dieciocho años sin distinción de sexo. El del Brasil, establece la edad de dieciocho y dieciséis años; en tanto que el código italiano, coincidiendo con el de derecho canónico, requiere dieciséis años para el varón y catorce para la mujer. Se propician estas últimas edades mínimas en el proyecto, teniendo en cuenta las modalidades de nuestra población y el desarrollo físico y psíquico adquirido a esa altura de la minoridad.

Por razones obvias se conceden dispensas a los menores de esa edad cuando la mujer hubiere concebido de aquel con quien pretende casarse, o se plantee la situación prevista en el artículo 132 del Código Penal. Para evitar dilaciones, el magistrado que entienda en la causa, acordará, en esta última hipótesis, la autorización respectiva (artículo 14).

III. — El proyecto contempla substanciales modificaciones al Código Civil sobre la ausencia con presunción de fallecimiento, derogando los artículos 110 a 126 de ese cuerpo de leyes, que tantas críticas justificadas han merecido (artículos 15 a 32).

En primer lugar, se refiere a la situación de las personas que han desaparecido dejando bienes abandonados. Con respecto a ellas no se plantea incertidumbre sobre si viven o han muerto, pero la necesidad de proveer a la conservación de sus bienes justifica el establecimiento de normas legales tendientes a ese fin. Encuéntrase aquí en juego el interés del desaparecido, el de los acreedores y herederos y también el de la sociedad, que no puede asistir impasible a la pérdida o destrucción de bienes aptos para satisfacer las necesidades de la población.

En cuanto a la presunción de fallecimiento, se reducen los plazos requeridos para la declaración de la muerte presunta, de seis a tres años en los casos de ausencia ordinaria y de tres a dos años en los de ausencia calificada, quedando reducido a seis me-

ses en el supuesto especial del naufragio. Con la rapidez y facilidad de las modernas comunicaciones, los plazos del código resultan excesivos. En la conveniencia de limitarlos coinciden hoy todas las opiniones, y en este sentido se orientan también las legislaciones más recientes.

La mayor simplicidad del sistema aconseja, además, suprimir la distinción entre posesión provisoria y definitiva de los bienes del ausente. Declarado el fallecimiento presunto, aquéllos deben transferirse a los herederos, quienes inscribirán el dominio a su nombre en el registro con la prenotación del caso, quedando así impedido de enajenar o gravar esos bienes sin autorización judicial.

Transcurridos cinco años a partir del día presunto del fallecimiento —en lugar de los quince que desde la ausencia establece la ley vigente— la prenotación queda sin efecto, y los interesados pueden disponer libremente de los bienes.

Se prevé también la fijación de la hora presumtiva del fallecimiento, para los supuestos de conmovencia.

La inadecuada redacción del artículo 125 del código actual, que ha determinado soluciones contradictorias, queda superada mediante las pertinentes disposiciones del proyecto.

Cabe señalar, asimismo, la supresión de algunos recaudos legales innecesarios, como es la prueba de que el ausente «haya sido gravemente herido», en el conflicto de guerra determinante de la declaración del fallecimiento presunto, o que en el desastre común «hayan muerto varias personas».

En el orden de los efectos que produce el fallecimiento presunto del ausente, es menester poner de relieve la posibilidad que se abre a favor del cónyuge para contraer nuevo matrimonio. Con ello se asigna a la presunción legal de la muerte todas las consecuencias posibles, y se elude la incongruencia del régimen vigente, que reputa al ausente fallecido respecto de ciertas relaciones jurídicas (dominio de los bienes, sociedad conyugal), pero en cambio lo considera aún con vida, para otros supuestos (inhabilidad de su cónyuge para contraer nuevas nupcias).

La declaración de fallecimiento presunto, formulada por los jueces, induce necesariamente la certeza moral acerca de ese hecho, y por consiguiente proyecta esa misma clase de certeza sobre la efectiva disolución de la unión conyugal. Es en esta certidumbre, establecida por ministerio de la ley, que se cimenta la facultad acordada al cónyuge del muerto presunto para contraer nuevas nupcias.

La eventual reaparición del ausente no debe ser óbice para la subsistencia de esa solución. Por respetable y digna de consideración que sea, en ese supuesto, la situación de aquel a quien se tuvo por fallecido, lo es, en mayor grado, la del segundo hogar creado al amparo de una presunción legal razonable y prudente, que permite a cualquiera de los esposos rehacer su vida y reencontrar en el seno de una nueva familia la felicidad a que todo ser humano tiene derecho.

El artículo 33 contempla situaciones que se presentan en ciertos casos excepcionales en que, a pesar de no existir dudas sobre la muerte de una persona, la desaparición del cadáver constituye un obstáculo insalvable para asentar la partida de defunción, único elemento probatorio admitido por la ley. Los accidentes en las minas y en la navegación suministran ilustrativos ejemplos al respecto. Advuértase que en

estos casos, a diferencia de los que en el proyecto se prevén bajo el rubro de «presunción de fallecimiento», ninguna incertidumbre se plantea sobre la existencia del desaparecido, toda vez que las circunstancias que rodean al hecho dan por resultado la certidumbre moral de su muerte. Sería injusto, por consiguiente, privar a las partes interesadas de todo medio de prueba.

Tratándose de situaciones de excepción, en las que se presentan circunstancias que deben ser apreciadas y valoradas, la comprobación de la muerte constituye en estos casos un verdadero acto jurisdiccional, que debe estar a cargo del juez y no del oficial del Registro Civil como en los casos ordinarios.

IV. — Los artículos 34 a 50 disponen sobre el «bien de familia».

Siendo la familia una célula de la sociedad, todo cuanto se haga para vigorizar a aquélla ha de redundar en beneficio de ésta, y, por otra parte, no ha de poder lograrse la consolidación y armonía del todo social si no se comienza por poner orden, seguridad y concordia, en cada una de sus partes componentes. No ha de olvidarse que, según la concepción del Estado y de la sociedad sustentada por la doctrina peronista, la sociedad, más que una simple unión de personas humanas, es reunión de familias a través de las cuales se incorporan los hombres a la sociedad civil para lograr en ella el bien común, que es el bien de todos y cada uno de los individuos integrantes de la comunidad.

Es por admisión de estos postulados que tanto la Constitución justicialista de 1949 como el segundo Plan Quinquenal de gobierno, han querido rodear al grupo familiar de las mayores garantías que aseguren su supervivencia, su cohesión, su estabilidad y su mejoramiento económico.

En el orden jurídico argentino, principalmente por obra de esos estatutos, la familia constituye el primero de los organismos sociales, que no en vano define el texto constitucional como «núcleo primario y fundamental de la sociedad», cuyos derechos «reconoce el Estado», en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. Por lo demás, la misma ley fundamental hace de la familia «objeto de preferente protección por parte del Estado», y entre los medios para hacer efectiva esa protección menciona la formación de la unidad económica familiar y la garantía del Estado en favor del «bien de familia», conforme a lo que una ley especial determine (Constitución Nacional, artículo 37, ap. II, incisos 2º y 3º).

Consecuente con esta orientación de nuestra doctrina, el segundo Plan Quinquenal incluye entre los objetivos generales del capítulo I, la preferente atención que recibirá por parte del Estado la familia mediante el desarrollo y protección de los derechos de ella que emergen del artículo 37 de la Constitución Nacional.

En la ejecución de tales propósitos, cabe señalar el primero de los objetivos especiales del mismo capítulo, según el cual, en el quinquenio 1953-1957, la protección de la familia se concretará en la adopción de medidas particulares de protección y fomento que posibiliten la formación del patrimonio familiar (inciso b), y en el establecimiento de exenciones impositivas adecuadas en concepto de «cargas de familia», (inciso d).

Con sentido análogo, el segundo Plan Quinquenal, en el rubro relativo a política impositiva, no sólo pre-

coniza la supresión o reducción de los impuestos que graviten en desmedro de la integración del núcleo familiar (XXII. E. 11), sino que dispone imperativamente que «el bien de familia no será gravado con impuestos cuando se transmita por causa de muerte dentro del núcleo familiar» (XXII. E. 12). Finalmente, el capítulo XXIX, que se refiere a la legislación general, propicia el aseguramiento de la unidad económica familiar, garantizando los medios necesarios para que se produzca y subsista el grupo familiar.

En la vía marcada por todos esos antecedentes, entre los cuales debe computarse el proyecto de ley que enviara el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación el 12 de septiembre de 1947, y que ahora se substituye por el presente mérito de los nuevos estudios realizados por los organismos técnicos respectivos, el régimen propuesto sobre los bienes de familia tiende a incrementar la cohesión y estabilidad del grupo doméstico. No puede haber familia vigorosa, si ésta queda librada a su sola suerte, sin el auxilio de medidas que remedien la posible desaparición de quien es su cabeza y sostén o las fluctuaciones de la condición económica de este último. No ha de olvidarse que todos los miembros de la familia en una u otra forma concurren a la formación de los bienes de que es titular, por lo general, el jefe del grupo. De aquí que no sea exagerado ver en el patrimonio del padre de familia una forma de propiedad en condominio, que en alguna medida conviene liberar de los peligros que representan la imprevisión, la necesidad, o aun la misma inconducta del titular, que puede ser llevado por un mal negocio o por abuso del crédito, o por la fuerza de las pasiones, a hipotecar y comprometer los bienes que no son exclusivamente suyos sino en verdad de la familia que él ha formado.

La institución del bien de familia, al substraer del movimiento económico algún inmueble rural o urbano, asegura a la familia contra esa eventualidad e impide que aquello que se ha formado con la cooperación solidaria de padres e hijos pueda menoscabarse o destruirse por la sola acción de uno de sus agentes productores.

A diferencia de lo que ocurría en la regulación que hicieron los proyectos nacionales anteriores del bien de familia, el presente no fija un valor máximo definido a los inmuebles susceptibles de ser afectados en ese carácter, supeditando, en cambio, ese límite a las necesidades de sustentación y alojamiento de la familia beneficiaria, según normas que establecerá la reglamentación.

El temperamento adoptado presenta una doble ventaja. Por lo pronto así se salva el escollo que implica la fijación legal de un límite máximo de valuación del bien, siempre arbitrario en razón del sinnúmero de circunstancias variables que condicionan su equitativa estimación en orden a las necesidades familiares, y la determinación de extensiones prefijadas de los inmuebles rurales, cuya efectiva productividad puede ser distinta según su calidad y ubicación.

Pero, además, cualquier canon preestablecido tiene la desventaja de resultar inequitativo respecto de las familias numerosas, que son las que el Estado está más interesado en proteger adecuadamente para aliviar las cargas de los padres más sacrificados.

El régimen proyectado permitirá ponderar, por una parte, las posibilidades de rendimiento del inmueble que se desee desafectar, y por otra, las exi-

gencias de la familia que se desea proteger, encarándas con el criterio de austeridad y sobriedad exento con todo de mezquindad, que es propio de la Doctrina Nacional que el Poder Ejecutivo se hace un deber en realizar cabalmente.

Entrando en la consideración de otros aspectos del proyecto, cabe señalar que el fin mismo de la institución requiere, como ahora se propone, la afectación no sólo del bien, sino también de sus frutos a la satisfacción de las necesidades de la familia beneficiaria. De aquí también que se exija, salvo situaciones transitorias excepcionales que, tratándose de viviendas, la familia viva en el predio respectivo y que, si se trata de otra clase de bienes, el titular realice la explotación por cuenta propia. Sobre todo con relación al campo esto es fundamental para lograr el arraigo de la familia campesina y para conseguir, como tantas veces se ha propugnado, que la tierra no sea un bien de renta sino un instrumento de producción.

Ya en el funcionamiento de la institución, la defensa de ella queda encomendada en primer término al cónyuge del propietario del bien, después a los demás miembros de su familia y destinatarios de la afectación y luego a la autoridad competente, cuya intervención es indispensable para la desafectación del inmueble de su destino.

La inembargabilidad y la inalienabilidad no deben llevarse más allá de lo que exijan la posibilidad de transmitir el bien previa desafectación, cuando concurre la decisión del cónyuge del propietario del inmueble o de los demás beneficiarios, y en defecto de ella la autorización judicial. El mismo principio explica también que sea factible embargar la parte de frutos del inmueble afectado que no se juzgue indispensable para cubrir las necesidades de la familia.

Por último, cabe destacar la novedad que contiene este proyecto con respecto a los anteriores y que consiste en la exención generalizada de los impuestos a la transmisión de bienes *mortis causa*, de sellado y tasas de inscripción en el Registro de la Propiedad, que favorece a la institución del bien de familia.

El Poder Ejecutivo está persuadido que el fracaso del régimen estructurado por el artículo 13 de la ley 10.284 es la palmaria demostración de que la liberación del impuesto a la herencia, especialmente, por entero coherente con la directiva ya recordada del segundo Plan Quinquenal, es decisiva para atraer el interés del pueblo hacia esa institución del bien de familia. Sólo así hará el hombre modesto el sacrificio de la disponibilidad eventual de su inmueble, desde ya erigido en bien de familia, para asegurar en cualquier contingencia ulterior la tranquilidad y estabilidad económica de los suyos, propósito que resultaría frustrado en la mayoría de los casos, por la necesidad de gravar o enajenar el bien que se transmite a los hijos para hacer frente al impuesto sucesorio que recae sobre la misma transmisión.

Por esto, la desgravación debe extenderse a los inmuebles sitos en las jurisdicciones provinciales. No podrá verse en ello un quebrantamiento de las facultades impositivas de las provincias respecto de las personas o las cosas existentes en su territorio. Desde que el bien de familia es una institución impuesta por la Constitución Nacional, y ya que según se ha visto no hay bien de familia practicable si no concurre en él la aludida exención impositiva, paradójico sería admitir en el caso la coexistencia de poderes

locales de imposición, incompatibles con la subsistencia del bien de familia. Es inexcusable concluir que quien quiso el fin, quiso también los medios adecuados a la obtención de ese mismo fin. Por tanto, si la voluntad del pueblo justicialista expresada por la voz y el mandato de sus auténticos y legítimos representantes impuso al gobierno de la Nación la obligación precisa de garantizar el bien de familia, ha tenido que darle los medios necesarios para que esa institución sea en nuestro país una realidad feliz y no una enunciación jurídica sin posibilidades de aplicación práctica carente de influencia efectiva en la vida nacional.

En una política coincidente con la expuesta, se establece que la autoridad administrativa deberá prestar a los interesados, gratuitamente, el asesoramiento y la colaboración necesarios para realizar todos los trámites de constitución e inscripción del bien de familia, haciéndose así superflua la intervención de profesionales, que siempre hará onerosa la gestión. Pero para el caso de que los interesados deseen recurrir a ella, se fija un límite máximo a los honorarios respectivos que ha de importar una considerable reducción de los establecidos por arancel. Desde que el Estado renuncia al cobro de diversos impuestos en obsequio al éxito de la institución proyectada, parece lógico eliminar o reducir otras erogaciones de significación que pudiesen obstar a la difusión de la iniciativa que se propone en beneficio de la familia argentina.

V. — Finalmente, los artículos 51 a 56 se refieren a la indivisión forzosa de bienes hereditarios, propugnando remediar los perjudiciales efectos que, para la unidad y estabilidad de las familias, ocasiona el régimen actual referente a la división de dichos bienes.

El proyecto faculta a los propietarios de bienes imponer a los herederos, aun forzosos, la indivisión de los bienes hereditarios por un término máximo de diez años. Ciertamente, es juicioso pensar que el mejor defensor que puede encontrar el núcleo familiar es el padre o la madre que lo han formado y que ordinariamente han estado día tras día pendiente de su suerte. Por tanto, si ante la perspectiva de la muerte, el fundador de la familia, en vista de las intimidades que él conoce mejor que nadie, desea prolongar esa protección que él ha brindado a los suyos, mediante una prudente indivisión temporaria de los bienes que les deja, la ley no debe sino favorecer y mantener esa decisión. Y aun si se trata de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole, con tal que constituya una unidad económica, el lapso de la indivisión podrá extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad, aun cuando ese tiempo exceda los diez años.

En el mismo orden de ideas, el proyecto autoriza a los herederos para celebrar convenios de indivisión por un plazo no mayor de diez años.

Pero, sin duda, el precepto de mayor interés es el que acuerda al cónyuge sobreviviente que hubiese adquirido o formado en todo o en parte, un establecimiento comercial o de otra índole, el derecho de oponerse a la división de ese bien, que quisiesen hacer los demás herederos, por un término máximo de diez años. Es una indivisión impuesta por el cónyuge supérstite, que viene a dar solución a un caso al que

aluden los autores: el de creador de una industria formada con el esfuerzo personal de una vida que, por la triste circunstancia de haber fallecido su esposa se ve precisado a liquidarla para satisfacer la parte que le reclaman los hijos, o tal vez los suegros, con lo que el efectivo dueño de los bienes es tratado por la ley (artículos 1291, 3452 y 3576 del Código Civil) como muerto en vida, y forzado a partir con otros la herencia de sí mismo.

La reforma que hoy se proyecta ha de impedir estas soluciones injustas protegiendo a quien con su trabajo ha creado o adquirido un establecimiento de las condiciones expresadas, contra una partición inesperada o inoportuna. Permitirá, en segundo lugar, que la sociedad no se vea privada de una actividad útil o no deba sufrir una dispersión de valores cuya reunión tiene mayor productividad. Tiene, en fin, la originalidad de otorgar la facultad de imponer la indivisión hereditaria —lo que no se había hecho hasta ahora para casos similares— al esposo sobreviviente.

Finalmente, es menester hacer notar la publicidad organizada en todos los supuestos de indivisión, mediante su inscripción en los registros respectivos.

El régimen de publicidad establecido en la medida que resulte practicable de acuerdo a la heterogénea naturaleza de las cosas, que pueden formar parte del acervo, configura un medio indispensable para advertir a los terceros, y especialmente a los acreedores particulares de los herederos, el derecho transitoriamente limitado que éstos vienen a tener sobre su parte hereditaria.

Este régimen resulta ser una exigencia de la misma ley desde que ésta priva a aquellos acreedores del derecho de ejecutar el bien indiviso o una porción ideal suya, impedimento que es una consecuencia ineludible de la misma existencia de la indivisión adoptada, ya que de nada habría valido crear tal sistema si los herederos pudiesen burlarlo por la vía indirecta de la ejecución por parte de sus acreedores reales o aparentes.

Pero lo que les está vedado a los acreedores aludidos, esto es arribar a la liquidación de los bienes indivisos, no resulta prohibido en la misma medida a los propios herederos, puesto que pueden concurrir causas graves que tornen inconveniente la subsistencia de la indivisión, como pueden ser la administración ruinosa que se haga del bien, la improductividad de la explotación, etcétera. En tales supuestos, u otros análogos, la ley contempla con adecuada flexibilidad el recurso judicial que permita hacer cesar la indivisión.

Por último se agrega una disposición tendiente a facilitar el pago de los gravámenes hereditarios mediante concesión de plazos que permitan afrontar su cancelación sin recurrir a la venta forzosa de los bienes sucesorios.

Estas son las razones que motivan y fundamentan el proyecto, para el cual el Poder Ejecutivo solicita de vuestra honorabilidad le preste su aprobación.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.  
Angel G. Borlenghi.

**Sr. Presidente** (Iturbe). — En consideración.

**Sr. De Paolis.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Iturbe). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. De Paolis.** — Entra el Honorable Senado a considerar esta mañana una de las más importantes leyes que hayan podido presentarse al Congreso de la Nación. Los distintos aspectos que ella contiene hacen esencialmente a diversos aspectos de la legislación positiva y de fondo de nuestro país, cuya reforma se relaciona con un hondo sentimiento de la vida argentina.

Comprende el proyecto que tenemos a nuestra consideración diversos aspectos. Primero, el referente a los menores, es decir, aquellos que no han llegado todavía a la mayoría de la edad y que han sido declarados por la Nueva Argentina como los únicos privilegiados. Trata, asimismo, de la ausencia con presunción de fallecimiento, anacrónicamente legislada en nuestro Código Civil; luego, de un instituto esencial que hace y hará fundamentalmente a las conquistas que significan la afirmación de la familia, cual es el «bien de familia»; también lo relacionado con la indivisión sucesoria, que tiene un hondo sentido moral, y, finalmente como una reforma incorporada al Código Civil, por la ley que estamos considerando se llega a la disolubilidad del vínculo matrimonial en las uniones desquiciadas.

Por su orden he de considerar los distintos aspectos, no sin antes destacar que esta aparente diversidad que pudiera aparecer dentro de este proyecto con un sentido inorgánico no lo es así, ya que el propósito del Poder Ejecutivo al enviarlo, como asimismo el de los señores legisladores al darle sanción, no ha sido sino modernizar por medio de un solo estatuto legal normas que hacen esencialmente a la protección de la familia y de los menores, aspectos que no podían ser postergados por más tiempo dentro de la legislación argentina.

Es posible que puedan criticarse las disposiciones de esta iniciativa aduciendo la existencia de defectos de técnica, pero nosotros, señor presidente, estamos por encima de toda técnica cuando los resultados que se obtienen como consecuencia de las instituciones consagradas afirman la felicidad del pueblo como conquista indudable del peronismo en esta hora luminosa de sus grandes realizaciones.

Resulta muy importante destacar, señor presidente, que este proyecto no es sino la consecuencia de un largo proceso en el que los hombres del Poder Ejecutivo y del Parlamento nacional se han dedicado al minucioso examen de estos problemas, aconsejando la sanción de medidas normas jurídicas de hondo significado social.

Con respecto al problema de los menores, debemos señalar que el proyecto, en los artículos 1º al 13, establece un régimen especial que mo-

difica el Código Penal en sus artículos 36 al 39 y a su vez tiene relación con la ley del Patronato de Menores, 10.903, en sus artículos 14 y 15, que rige desde el 21 de octubre de 1919.

¿Cuál es la orientación —y el espíritu— que guía la reforma del proyecto que consideramos? Fundamentalmente, una muy importante: se trata, señor presidente, de apartar a los menores del régimen del Código Penal creando para ellos un sistema que tienda a su reeducación, mejora y reencauzamiento.

José María Paz Anchorena, en su *Curso de Derecho Penal*, página 422, tomo III, señalaba: «La materia relativa a los menores presenta ciertas particularidades que la alejan del derecho penal. Dentro de la orientación moderna de estos estudios, el menor sale de la esfera del derecho penal, no se le debe aplicar penas, el castigo no tiene objeto, pues no se trata de castigar, sino de reformar; ni se le debe aplicar tampoco medidas de seguridad propiamente, porque éstas tienen un objeto negativo: evitar la comisión de delitos, mientras que en punto a menores no se trata de evitar que cometan daños, sino, primordialmente, de corregirlos, de reformarlos, darles un oficio, realizar un objeto positivo.»

—Ocupa la presidencia el señor vicepresidente de la Nación, contraalmirante (R.) don Alberto Teisaire.

Carlos Arenaza, en su obra *Delincuencia infantil*, nos dice que las condiciones de la vida actual favorecen en toda forma la participación del niño en una serie de actividades que lo dirigen por una pendiente peligrosa para su salud moral.

Por otra parte, las estadísticas demuestran que el delincuente profesional, el vago y en general todos aquellos que viven al margen del Código Penal, son individuos que en su niñez y en su juventud sufrieron el descuido y el abandono de sus padres y no conocieron otro ambiente que la calle y temporariamente el asilo o el reformatorio.

Pero más importante aún es el pensamiento del doctor Octavio González Roura, en su *Legislación penal para menores*, que nos orienta justamente en el sentido que tienen estas disposiciones relativas a los mismos del proyecto que estamos considerando.

Comenzaba este libro el penalista con las siguientes expresiones: «La premisa fundamental de las ideas expuestas en este libro es la irresponsabilidad absoluta hasta los 18 años.» El nuevo proyecto la trae hasta los 16.

«Se parte, para ello —sigue diciendo—, de un principio consagrado ya en forma definitiva: la juventud delincuente no debe ser castigada sino protegida.

«Es necesario comenzar por establecer de una vez para siempre la más absoluta separa-



ción entre el derecho penal de los adultos y el de los menores.

«Más aún, respecto de estos últimos no debe hablarse de derecho penal.

«Las únicas disposiciones aceptables en el código deben ser apenas las destinadas a declarar, justamente, que no rige para ellos en su parte especial. El niño debe quedar fuera del derecho penal. Al menos, mientras no varíe su concepción actual y se continúe llamando derecho penal a un derecho retributivo y expiatorio con castigos y penas como base necesaria.

«Cabrá, en cambio, dentro del marco del derecho penal, el día que se acepte llamar también así a la función correccionalista, no con penas sino con medidas educadoras, y cuando se reconozca que la disciplina denominada pedagogía correctiva constituye el verdadero ideal de la criminología.»

Muchos países han legislado en esta materia de menores. Inglaterra ha dictado tres leyes fundamentales: la *Probation of Offenders Act*, de 1907; *Children Act*, de 1908, y *Prevention of Crime*, de 1908.

Francia dictó la ley de 1912, que se debió a la iniciativa parlamentaria, y tiene antecedentes en los proyectos de ley presentados a la Cámara de Diputados por Drelon en 1907, Deschanel en 1909, y Ferdinand Dreyfus en el Senado, en 1910.

Bélgica tiene la ley de 1912, y como antecedente un proyecto de 1889 del ministro Le Jeune.

Suiza, una ley del cantón de Ginebra, del 4 de octubre de 1913, puesta en vigor en 1914, que ha armonizado el procedimiento judicial relativo a los menores con las dificultades que se presentaban en la práctica, para sustraer al niño del ambiente tribunalicio.

Brasil tiene el Código de Menores, que es del año 1927 y consta de 230 artículos. En el Uruguay se ha dictado también el Código del Niño en 1934. Chile dictó la ley 2.675, del 26 de agosto de 1912, que se llama de protección a la infancia desvalida.

Actualmente cuentan con tribunales de menores todos los Estados de la Unión Americana; la mayoría de los países europeos, como Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Portugal, Polonia, Holanda y algunos países de América como México. También Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Egipto.

El primer tribunal de menores se instaló en Chicago en el año 1889.

En nuestro país han existido numerosas iniciativas parlamentarias en este sentido, entre las cuales podemos mencionar la iniciativa de González sobre cárceles regionales y colonias agrícolas para menores delincuentes, del 6 de julio de 1922; el proyecto del diputado Pinto

sobre instituto de estudio y clasificación para menores delincuentes, del 16 de agosto de 1923; del senador Ramón S. Castillo sobre punibilidad de los menores, del 22 de septiembre de 1933; el proyecto del diputado Bard sobre creación de establecimientos carcelarios y reformativos para hombres, mujeres y niños, del 4 de octubre de 1923; el de Rodolfo Moreno, del 29 de julio de 1925; el de Ferrer, del 3 de septiembre de 1947, y el del diputado Bard sobre internado de observación y clasificación de menores delincuentes, del 16 de octubre de 1923.

En definitiva, señor presidente, todo ello nos está demostrando la enorme importancia que tiene la reforma relativa a menores, contenida en el proyecto de ley que estamos considerando esta mañana.

Según el Código Penal vigente, la responsabilidad de los menores y su imputabilidad comienzan a la edad de 14 años. Dice el artículo 36 que no es punible el menor de 14 años, e implanta luego un régimen especial para cuando los menores tuviesen más de 14 años y menos de 18, y recién después de los 18 años se les hace caer en la responsabilidad penal.

El proyecto que estamos considerando es mucho más avanzado y más importante: acepta el criterio de la gravedad de la pena, como asimismo el del discernimiento del menor, ambos admitidos por la Comisión Especial de las Naciones Unidas, y señala expresamente la imputabilidad del menor hasta los 16 años de edad. Un menor que hubiera estado incurso en delito hasta esa edad, no es objeto de proceso; se encuentra fuera del derecho penal y no es objeto, como he dicho, de imputabilidad, y por lo tanto de responsabilidad.

Luego existe un sistema intermedio de responsabilidad penal atenuada, con criterio correccionalista, que va de los 16 a los 18 años y que está contemplado en los artículos 39 y 49 del proyecto. Finalmente, se establece un régimen especial en el artículo 89, que se refiere a los menores de más de 18 años y hasta los 22, donde existe proceso y se aplican, además de las normas correctivas, las penales, cuando ello fuere necesario.

Con estas breves palabras, dejo fundado el aspecto relacionado con los menores.

A su vez, el proyecto en consideración consagra una reforma importantísima en el artículo 14: se trata de la edad mínima para contraer matrimonio.

Nuestra ley de matrimonio civil, número 2.393, del 12 de noviembre de 1898, señala que es un impedimento para contraer matrimonio no tener la mujer 12 años cumplidos y el hombre 14. De manera que nuestra legislación vigente permite el matrimonio siempre que la mujer tenga no menos de 12 años y el hombre no menos de 14.



Evidentemente, nuestro código se basa en el principio romano que tenía solamente en cuenta, a los efectos de contraer matrimonio, la aptitud para procrear. Pero, considerado el matrimonio y la familia como una comunidad, no solamente relacionada a los efectos de su procreación, sino con una serie de responsabilidades y de aspectos conexos con el sostenimiento del hogar, con otros de índole moral y con el sentido de la responsabilidad de los contrayentes, no puede considerarse a esta altura de los tiempos como que la edad de los 12 años en la mujer y 14 en el hombre, sea un límite justo, sereno y apropiado para contraer un vínculo de tanta trascendencia como el matrimonial.

El proyecto en consideración eleva los límites mínimos de edad para poder contraer matrimonio a 14 años para la mujer y a 16 para el hombre.

A los efectos de que pueda ser considerado por las señoras y señores senadores lo prudente que es el límite de edad establecido en este artículo, he de señalar que en el código suizo se exigen 20 años para el varón y 18 para la mujer; en Francia, 18 para el varón y 15 para la mujer; en Finlandia, 18 para el varón y 17 para la mujer; en el código alemán, 21 para el varón y 16 para la mujer, permitiéndose la dispensa de edad para el hombre, siempre que tenga más de 18 años; en Rusia, el Código de Matrimonio dictado en 1926 exige 18 años sin distinción de sexos; Brasil establece 18 para el varón y 16 para la mujer; y el código italiano, coincidente con el derecho canónico, requiere 16 años para el varón y 14 para la mujer.

Como vemos, señor presidente, el límite de edad mínimo que se establece es prudente y se adecua, en gran medida, a lo establecido en la legislación comparada universal.

Otro de los capítulos importantísimos de este proyecto es la legislación relacionada con la ausencia con presunción de fallecimiento, que se encuentra contemplada en los artículos 15 a 32.

La ausencia con presunción de fallecimiento es una institución consagrada en el Código Civil a los efectos de poner remedio a la situación que se presenta cuando una persona se ausenta del lugar de su domicilio por un largo tiempo sin que de ella se tengan noticias, apareciendo como presuntiva su muerte, a fin de adoptar medidas de protección, administración y seguridad de sus bienes. Nuestro Código Civil, aun en este caso de la ausencia con presunción de fallecimiento, afirma la indisolubilidad del vínculo matrimonial.

El Código Civil, señor presidente, comenzó su vigencia el 1º de enero de 1871. Han pasado muchos años y la realidad y las condiciones de la vida han variado esencial y fundamentalmente. Era fácil en aquellos tiempos que un hombre, por las contingencias de las comunica-

ciones de entonces, pudiera desaparecer de su domicilio por largo tiempo. De manera, entonces, que la legislación de aquella época establecía dilatados plazos en la esperanza de que el desaparecido pudiese volver al lugar de su partida. Se tenían en cuenta los largos viajes en velero, por regiones desconocidas, el espíritu de aventura de muchos, sobre todo en la época de la colonización de América, en que los hombres acometían empresas de las que tardaban mucho tiempo en volver, sin que se supiera nada de sus vidas hasta el momento del regreso.

Hoy, esos aspectos han variado totalmente. El mundo es conocido y la técnica moderna ha acercado los continentes en tal forma, que los plazos del Código Civil, en especial el de los quince años para la ausencia con presunción de fallecimiento, resultan completamente anacrónicos.

A acortar esencialmente los plazos de la ausencia con presunción de fallecimiento se dirige este proyecto que nos ha enviado el Poder Ejecutivo, para poner a tono esta institución con la realidad de la hora que estamos viviendo. Así, por ejemplo, se establece que la ausencia con presunción de fallecimiento sólo podrá ser declarada y tenida por cierta cuando haya transcurrido el plazo de cinco años en cambio del de quince que señala el Código Civil.

Brevemente pasaré a señalar los aspectos que diferencian a este proyecto de la legislación actual.

En primer lugar, el Código Civil vigente no legisla sobre la simple ausencia. La ausencia con presunción de fallecimiento es una institución que hace presumir el fallecimiento del ausente. Pero muchas veces existen ausentes cuyo fallecimiento no se presume; se conoce su existencia, pero evidentemente hay que tomar medidas de administración sobre sus bienes. En el proyecto que tratamos desde el artículo 15 al 20 se reglamenta la simple ausencia, llenándose así un vacío de la legislación vigente.

Por otro lado, el proyecto que consideramos acorta los plazos de la presunción de fallecimiento, y mientras la legislación actual exige seis años de ausencia para que pueda pedirse aquélla, en este proyecto ese plazo se reduce a tres.

Por otra parte, se simplifica el procedimiento con respecto a la administración de los bienes, ya que en la legislación actual existe la administración provisoria y después la tenencia definitiva de los bienes, mientras que en el proyecto que tratamos el sistema se simplifica, estableciéndose tan sólo el de la entrega de los bienes, en la forma que el mismo determina.

Un aspecto que resulta muy importante con relación a esta institución que consideramos, y que era anacrónico frente a la realidad de los tiempos que vivimos, es el efecto de la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento

frente a la disolubilidad o no disolubilidad del vínculo matrimonial.

El artículo 83 de la ley de matrimonio civil señala expresamente lo siguiente: «El fallecimiento presunto del cónyuge ausente o desaparecido, no habilita al otro esposo para contraer nuevo matrimonio.

«Mientras no se pruebe el fallecimiento del cónyuge ausente o desaparecido el matrimonio no se reputa disuelto.»

Ahora bien. Esta disposición ha sido objeto de numerosas críticas, y recuerdo entre ellas la del doctor Juan Antonio Bibiloni, quien en su *Anteproyecto de Código Civil* decía: «Si se supone o se declara muerto al causante; si se entregan sus bienes a sus herederos para que los administren; si se autoriza a que se litigue entre ellos para saber cómo se reparten y a quiénes toca la herencia porque ésta se abrió a su fallecimiento, ¿cómo puede pretenderse que el muerto esté vivo cuando su desaparición no deja otra explicación legal que la de su muerte?»

Angel Ossorio y Gallardo, en su libro *La Reforma del Código Civil Argentino*, dice lo siguiente: «Yo pregunto: Si esta presunción de la muerte es tan categórica que da lugar a la transmisión de la herencia sin limitaciones, ¿por qué no aplicar sus efectos al vínculo matrimonial? ¿Qué lógica tiene considerar a una persona muerta para todos los efectos menos para el connubio? El precepto legal resulta así incongruente y contradictorio —sigue diciendo este tratadista— con el resto de la economía de la institución, pues si se parte de una determinada presunción, la misma tiene que aplicarse a unas y otras de las varias y diversas situaciones consiguientes que puedan presentarse.»

No solamente se trata de la opinión de nuestros propios tratadistas, sino que también la legislación internacional en los países más adelantados del mundo ha consagrado instituciones con una conclusión distinta a la rígida establecida en nuestra legislación positiva.

Así, por ejemplo, en Inglaterra no se considera cometido el delito de bigamia si el esposo del desaparecido contrae un segundo matrimonio luego de transcurridos siete años de ausencia de aquél, e ignorándose durante ese tiempo que viva efectivamente. La presunción se establece en favor del inocente y el que lo acuse debe probar que cuando se casó de nuevo, el cónyuge del ausente conocía la existencia de éste.

El código civil suizo prohíbe al cónyuge de un ausente contraer nuevo matrimonio antes de la disolución judicial del anterior, la que puede solicitarse simultáneamente con la declaración de ausencia o por separado, aplicándose el procedimiento previsto para el divorcio.

Demolombe, en su curso sobre el Código de Napoleón, dice lo siguiente: En Francia la controversia gira en torno del texto del artículo 139

del código civil, cuya segunda parte establece que el esposo ausente cuyo cónyuge ha contraído nuevo matrimonio será el único que pueda impugnar esta unión, sea por sí mismo o por apoderado, munido de las pruebas de su existencia. El Código de Napoleón es consecuente con su criterio negativo de atribuir a la ausencia una presunción de muerte y por ello la desaparición de un esposo no disuelve, en principio, el nexo matrimonial, pero sí autoriza a realizarlo.

En Italia se dictaron distintas leyes especiales en presencia de situaciones o acontecimientos extraordinarios. Así, las leyes de 1896 y de 1913, con motivo de las guerras de Africa e italo-turca, y la de 1919, a raíz de la primera guerra mundial, cuyo artículo 16 autorizaba al cónyuge presente, registrada la sentencia de muerte presunta del ausente, a contraer nuevo matrimonio, el que podía ser impugnado por el desaparecido, al retornar, y también por los nuevos esposos.

El nuevo código civil italiano en sus artículos 67 a 70 autoriza al cónyuge del ausente a contraer nuevo matrimonio una vez que quede firme la sentencia declarativa de fallecimiento presunto. La reaparición del ausente determina la nulidad de ese matrimonio, sin perjuicio de los efectos legales que el mismo haya producido.

En el derecho civil alemán el nuevo matrimonio del otro esposo disuelve el anterior y no es nulo aunque el ausente reaparezca, salvo que los nuevos esposos hubieran conocido esa circunstancia en el momento de casarse, según lo establece el artículo 1.348, y dice el 1.349 que si la sentencia de declaración de muerte de uno de los esposos fuese impugnada, el otro no podrá volver a casarse hasta que concluya el pleito, salvo que la demanda se promoviese 10 años después de publicarse el fallo de la ausencia.

En nuestro país, el anteproyecto de Bibiloni establecía que la declaración de muerte con presunción de fallecimiento del ausente autoriza al otro cónyuge a contraer nuevo matrimonio, y al realizarse éste se tiene por disuelto el anterior, salvo que los esposos conocieran la existencia del ausente. La reaparición de éste no invalida el nuevo casamiento y sólo el cónyuge que reaparece puede impugnar el nuevo matrimonio.

El proyecto de la comisión reformadora de 1936 establecía: «La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento disuelve el vínculo matrimonial. La reaparición del ausente no invalida el nuevo matrimonio, salvo que en el momento de celebrarlo los nuevos esposos conocieran la existencia del ausente.»

El artículo 31 del proyecto que estamos considerando establecía la disolubilidad del vínculo matrimonial, declarada la ausencia con presun-

ción de fallecimiento, y autoriza al otro cónyuge a contraer nuevo matrimonio. La Comisión de Legislación de la Honorable Cámara de Diputados, al proponer la reforma del artículo 31, varía el concepto y establece el principio de que la ausencia con presunción de fallecimiento no disuelve el vínculo matrimonial, pero autoriza al cónyuge a contraer nuevo matrimonio, en cuyo caso la realización de este último es el que disuelve el vínculo anterior.

Se respeta, señor presidente, con la redacción dada por la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, el sentimiento de aquellas personas que, pese al juicio de ausencia con presunción de fallecimiento y dictada la sentencia, desearan esperar al ausente. Solamente se disuelve el vínculo matrimonial, repito, cuando el esposo o la esposa deseen contraer nuevas nupcias y éstas se realizan. Por eso, se ha establecido en el artículo 31, en su primera parte: «La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento autoriza al otro cónyuge a contraer nuevo matrimonio, quedando disuelto el vínculo matrimonial al contraerse estas segundas nupcias. La reaparición del ausente no causará la nulidad del nuevo matrimonio.»

Este último apartado es para evitar las consecuencias de las disposiciones de algunos códigos europeos, que permiten al ausente, cuando reaparece, pedir la nulidad, cuando se considerase que el cónyuge hubiese obrado con mala fe.

Esto ha hecho pensar mucho a la comisión, pero en definitiva se ha optado por el sistema señalado, porque, evidentemente, el nuevo cónyuge ha contraído matrimonio después de 5 años de espera o más. Los sentimientos para con el primer cónyuge han desaparecido y han nacido otros nuevos; esto, en primer lugar, y, en segundo lugar, porque, de permitirse la impugnación del matrimonio, podría prestarse a abusos de chantaje o extorsión.

Otra de las instituciones que consagra el proyecto que estamos considerando, a partir del artículo 34, es la relacionada con el bien de familia.

Se trata, señor presidente, de una institución altamente importante, de suma trascendencia, impuesta por la propia Constitución Nacional, cuando en su artículo 37, en el capítulo *De la familia*, apartado 2, señala que el Estado formará la unidad económica familiar de conformidad con lo que una ley especial establezca; y en el apartado 3, cuando el Estado garantiza el bien de familia, conforme, dice, con lo que una ley especial determine.

De manera que en esta parte de la ley estamos cumpliendo estrictamente con un mandato de la Constitución Nacional justicialista.

A su vez, cumplimos, señor presidente, con lo dispuesto en el objetivo especial XII, del capítulo XXII del segundo Plan Quinquenal, que

dice que el bien de familia no será gravado con impuesto cuando se transmita, por causa de muerte, dentro del núcleo familiar; y con el objetivo especial XI, del mismo capítulo, que expresa que los impuestos que puedan gravitar en desmedro de la integración del núcleo familiar serán suprimidos o reducidos; de manera que este mismo apartado comprende tácitamente la obligación de dictar el régimen especial sobre bien de familia.

Decía el constituyente doctor Mende, en la Convención Nacional reformadora, con respecto a este problema, el 9 de marzo de 1949: «Esta institución del bien de familia y su correlativa de la unidad económica familiar, aseguran a la familia contra la posibilidad de una injusticia. El bien de familia y la unidad económica familiar se construyen con el trabajo de padres e hijos y no pueden ser destruidos por error o la inconducta o la desgracia de uno solo de sus agentes constructores sin que aparezca esto como una evidente injusticia.»

Han existido sobre el bien de familia numerosas iniciativas parlamentarias. Entre ellas, la del diputado Pera, ley de amparo a la familia, del año 1906; del diputado Cafferatta, sobre determinación del bien de familia, de 1914, la del diputado Parodi, de 1933; del diputado Martínez, sobre bien de familia, en 1942; del Poder Ejecutivo, inscripción del bien de familia, en 1947; del diputado Dávila, sobre modificación de los artículos 13 y 18 de la ley del hogar, en 1948; del diputado Rumbó, sobre vivienda económica de la familia, en 1948; del senador Ramella, sobre inembargabilidad y exención del único bien urbano y rural, en 1951, y del diputado Quedo, sobre indivisión de la casa hogar, en 1953.

Según la Comisión Reformadora de 1936 del Código Civil, la institución del bien de familia debía ser incorporada a dicho cuerpo legal y establecía un régimen especial dentro del proyecto de Código Civil sobre bien de familia, entre los artículos 124 y 131, fijando el monto superior del inmueble hasta la suma de cincuenta mil pesos.

En nuestro país se encuentra instituido el bien de familia, pero el mismo ha sido inoperante en su aplicación, como en el caso de la ley 10.284, que nos rige (ley Costa sobre lotes del hogar o *homestead*) dictada el 25 de septiembre de 1917, al igual que la ley Cafferata número 9.677, denominada ley de casas baratas, que adolece del defecto de proteger el bien de familia hasta el monto de diez mil pesos. Hay a su vez disposiciones particulares relativas al bien de familia que protegen al hogar argentino, conforme con el régimen de previsión social que haya facilitado la construcción de la vivienda. Así nos encontramos, por ejemplo, con la ley del hogar ferroviario, número 10.650 de 1919; el decreto 14.682, de 1946, Caja Nacional de Aho-

rro Postal, que fué luego convalidado por la ley 12.921 de 1946 y otras leyes más que no he de enumerar para no cansar la atención de los señores senadores.

Deseo sí recalcar que la institución del bien de familia, es decir, el hogar, el techo de la familia común, debe ser protegido por una serie de facilidades y garantías que el Estado otorga a los efectos de resguardar la casa donde ha de habitar el núcleo familiar que es la célula de nuestra sociedad.

El bien de familia ha recibido distintas denominaciones a través de la legislación mundial. En Estados Unidos, se lo denomina *homestead*; «patrimonio familiar», en Italia; *heimsteat*, en Alemania; «asilo de familia» en Suiza; «bien de familia» en Francia; «hogar» en Venezuela; «patrimonio de familia» en Méjico; «casal de familia» en Portugal; «bien de familia» en Brasil.

Existen dos concepciones relacionadas con el bien de familia: una de ellas se vincula con el derecho público. Se encuentra relacionada esta institución con el afán colonizador estatal que trata de poblar las tierras lejanas y de fertilizar tierras incultas, afincando al labrador en las mismas, principalmente en aquellos países de inmigración que necesitan extender por sus campos desiertos el trabajo fecundo del hombre. Este tipo de bien de familia ha recibido el nombre de *homestead* público, y se ha aplicado en ciertos Estados de los Estados Unidos de América. El otro tipo de *homestead*, o de bien de familia, es de carácter privado; se trata más bien de la pequeña casa familiar o de la pequeña finca rural a los efectos de ser protegida por el Estado con una serie de garantías, y se basa en un sentido más social que políticoeconómico como en el caso del bien de familia con sentido público o *homestead*.

Nuestra legislación se ha inclinado hacia la tendencia francesa que ha legislado más bien sobre este segundo tipo de bien de familia o *homestead*. Si tuviéramos que definir esta institución desde un punto de vista genérico, sin ir a las distintas particularidades que la ley señala, para precisar su alcance y su contenido, adoptaríamos la definición y el concepto que da Lázaro Trevisán en su obra *Partición de Herencias*, cuando define al bien de familia como un inmueble urbano o rural, que en virtud de la ley es afectado al servicio de familia, garantizándose el cumplimiento de su destino mediante su inembargabilidad y diversas restricciones a su transmisibilidad a terceros, bien sea entre vivos o aun por causa de muerte.

La situación privilegiada de estos bienes dentro del patrimonio familiar —dice—, se completa con exenciones impositivas y otras ventajas que varían según las leyes creadoras de este tipo de bienes.

La finalidad de la institución es la protección de la familia, a la que se trata de acordar tranquilidad y seguridad, especialmente en épocas de infortunio para su jefe, por razones de evidente trascendencia social.

Ya el mismo Poder Ejecutivo de la Nación, en 1947, el 17 de septiembre, cuando envió un proyecto sobre «bien de familia» al Congreso Nacional, nos decía que «el objeto que persigue el proyecto de ley que se acompaña es dar las mayores garantías posibles de estabilidad y tranquilidad a la familia que ha logrado adquirir un bien inmueble que debe quedar ajeno a la acción de los acreedores por créditos de fecha ulterior a la inscripción del bien de familia».

Muchas instituciones americanas han consagrado el bien de familia en sus textos, y entre ellas podemos mencionar las de Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Cuba, Guatemala, Nicaragua y la nuestra de 1949.

Nuestra orientación ha seguido la tendencia de la legislación francesa en esta materia, que comienza en el año 1886 con un proyecto de Jules Fourdinier, seguido por otro del abate Lemire, de 1893. La ley francesa sobre el bien de familia, del 12 de julio de 1909, establece el principio de la inembargabilidad, de la indivisión por causa de muerte y otros beneficios. Esta ley ofrece el serio inconveniente, como a su vez lo tienen otras legislaciones, de que impide constituir un bien de familia que estuviera gravado con hipoteca.

Uruguay ha dictado la ley 9.505, del 10 de mayo de 1938, por la que se instituye el bien de familia siguiendo los lineamientos de la tendencia francesa, ya sea para casa habitación o para finca rústica ocupada o cultivada.

Ofrece el mismo inconveniente de la ley francesa, pues por el artículo 79 impide la constitución sobre bienes hipotecados, gravados o dados en anticresis.

En Suiza, los artículos 349 y 350 del código civil autorizan a los cantones a instituir y reglamentar el «asilo de familia», pudiendo constituir en tales a los fundos agrícolas e industriales o a las casas habitación de familia de las características y condiciones generales que el propio código establece.

Según el proyecto de ley que tenemos en consideración, el bien de familia puede ser constituido por el propietario de un inmueble urbano o rural cuyo valor no exceda de las necesidades de sustento y vivienda de su familia, según las normas que se establecerán reglamentariamente. Es decir, que se zanja las dificultades de otras leyes, que ponían una cantidad específica como monto protegido, y en cambio deja librado a la reglamentación, para que ésta adecue la legislación a las épocas cambiantes.

El proyecto establece una serie de recaudos que ponen a cubierto este bien de las contingencias o los infortunios de la familia, no pudiendo ser gravado o hipotecado, ni ejecutado por deudas posteriores a su constitución; tiene exención impositiva y no puede ser sacado de su afectación sino por causales estrictas, y con el consentimiento del cónyuge, salvo motivos atendibles.

Las disposiciones del proyecto son muy claras y, en esta materia, es preferible dejar librado justamente a la interpretación, que en cada caso puede hacerse, el amplio espíritu que en este aspecto contienen las sabias orientaciones existentes en la ley que estamos comentando.

— Otra institución contenida en la parte final del proyecto es la relacionada con la indivisión sucesoria. El régimen de la indivisión sucesoria no existía en nuestro Código Civil. Por el contrario, señala justamente el artículo 3.452, que los herederos, sus acreedores y todos los que tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes, pueden pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia, no obstante cualquier prohibición del testador o convención en contrario: «Partición es el acto por el cual, al dividirse los bienes de la herencia, se disuelve la comunidad hereditaria, convirtiéndose a cada uno de los herederos en dueño exclusivo de las cosas que se adjudicaran.» (Cámara Civil 2ª de La Plata, sala II, 31 de diciembre de 1946.)

Solamente existe el principio de indivisión, legislado en el caso del condominio, en los artículos 2.693 y 2.694.

Es altamente significativo y sorprendente que en el Código Civil no haya habido una excepción para que en algunos casos pudiera consagrarse la indivisión de los bienes hereditarios. Y esto ha permitido que en nuestra época, en el caso del fallecimiento de un hombre, sus herederos tuviesen mucho más el sentido materialista que el altruista de la vida: No existen disposiciones que corrijan esta falta de sentido espiritual —y hasta moral, diría— cuando los herederos dilapidan y deshacen un bien que ha sido honra de quien lo creó.

La indivisión, señor presidente, que se establece en el proyecto, responde a un sentido altamente moral y puede ser impuesta por el testador por un plazo de diez años, el que puede extenderse hasta la mayoría de edad de todos sus herederos, cuando se trate de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero o minero o cualquier otro que constituya una unidad económica.

A su vez, la indivisión puede ser opuesta por el cónyuge que haya contribuido en todo o en parte a la adquisición o formación de ese establecimiento y puede ser también pactada por los herederos.

Resulta una reforma altamente importante, altamente trascendente y que no puede postergarse por más tiempo, cambiándose así la orientación actual del Código Civil.

Existen numerosos fundamentos que podría mencionar con relación a este aspecto, como por ejemplo las razones que daba el diputado Ernesto Celesia en el año 1913, cuando señalaba los beneficiosos resultados que daría, en algunos casos, el establecimiento de la indivisión para cimentar la unidad de la familia. Decía en una parte del mismo: «Por nuestro Código Civil, en las sucesiones, cualquier heredero puede pedir la partición y adjudicación de la herencia; más aun, ella es obligatoria cuando existen menores o incapaces interesados. A reformar estas disposiciones tiende el primero de los proyectos presentados, porque su aplicación ha resultado perniciosa, desde que ese derecho se convierte en instrumento de desunión, de disolución de la familia, institución fundamental que los legisladores argentinos deben preocuparse de mantenerla rodeada de los mayores prestigios, para que se pueda salvar íntegra al través de la evolución a que fatalmente está sujeta, como todas las instituciones sociales.

«Y a nosotros, con más razón que a las viejas sociedades europeas, la institución de la familia debe preocuparnos, porque componemos una sociedad heterogénea, que recién comienza a plasmarse para adquirir su forma definitiva, o mejor dicho, los perfiles propios y característicos que han de distinguirla en el futuro.

«Cimentar la unión en la familia, evitar en lo posible las causas que provocan desgraciadamente su derrumbe; intensificar los vínculos naturales del afecto y del respeto, entiendo que es hacer obra buena, que hará de la familia argentina el hogar que todos debemos ambicionar, fundamentado en el más puro de los afectos y que más honra a la humanidad.»

La legislación comparada, si atendemos a la generalidad de los países, acepta el principio de la indivisión.

El código de Italia, en su artículo 984 establece que puede ser solicitada la indivisión un año después de la mayoría de edad; el código alemán extiende el límite de la indivisión hasta 30 años, permitiéndose una mayor cuando se la haga depender de un acontecimiento que debe producirse en la persona de un coheredero. El código de Chile, en su artículo 1.317, permite el pacto de indivisión por un término de 5 años, pudiendo renovarse, pero no admite que el testador pueda imponer la indivisión a sus herederos; el código francés, en su artículo 815, inciso 2, establece que: «... no obstante se puede pactar el suspender la partición por un término limitado, y ese pacto no puede ser obligatorio por más de 5 años, pero no permite la indivisión testamentaria. El código de Luisiana, en sus

artículos 1.223 y 1.224, autoriza la indivisión hasta 5 años, dispuesta por el testador o donante, o hasta que sus hijos o nietos lleguen a la mayoría de edad. Y el código Sardo, que en algunos aspectos se inspiró en nuestro Código Civil, establece este mismo principio en su artículo 1.038. En Suiza, la indivisión está legislada con el nombre de «Comunidad prolongada», y se encuentra contemplada en los artículos 229 a 236 del Código Civil, de acuerdo a los cuales el cónyuge superviviente puede prolongar la comunidad con los hijos habidos en su matrimonio; si ellos son menores, la prolongación deberá ser aprobada por la autoridad tutelar.

Bibiloni, en los artículos 16 y 17 del capítulo que trata de la partición, dispone:

«El causante puede disponer por testamento que no se hará división de sus bienes por un término que no exceda de diez años. Si los herederos son forzosos podrá prohibir de igual manera la división cuando existan uno o varios menores, hasta que haya llegado el último de ellos a la mayor edad. Podrá extender, en este caso, la prohibición a los bienes gananciales por el tiempo que le sobreviva su cónyuge, aunque todos los herederos sean mayores.

«Es nula la convención o la disposición que autorice la indivisión por un término mayor que el expresado, pero sólo en lo que exceda de ese tiempo. Puede ser renovada por acuerdo unánime.»

En fin, señor presidente, resulta evidente que esta institución de la indivisión es altamente necesaria y beneficiosa y tendrá un aspecto moralizador y de resguardo esencial de la familia, tal como está legislada en el proyecto que estamos comentando.

Y ahora, señor presidente, me he de referir particularmente a la segunda parte del artículo 31, relacionada con la disolución del vínculo matrimonial, que ha sido incorporada por la Honorable Cámara de Diputados durante la discusión de este proyecto de ley efectuada en el día de ayer.

Señor presidente: numerosos autores, entre ellos los doctores Héctor Lafaille y Juan Carlos Rébora, refiriéndose a esta materia han dicho con toda certeza y razón que todos los argumentos ya han sido dados. El segundo de estos autores decía que se es divorcista o se es anti-divorcista, como en materia de represión se es abolicionista o antiabolicionista.

Razones para afirmarse dentro del campo estricto de la indivisibilidad absoluta existen muchos; pero a mi entender, señor presidente, son muchas más las que existen a los efectos de reafirmar la posición de la disolubilidad, sobre todo cuando se crea un régimen prudente, ajustado y no de licencia.

Las razones que se han dado frente a la no disolubilidad del vínculo matrimonial vienen

esencialmente del campo religioso, y se fundan en el dogma de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, considerado éste como un sacramento. Y no es una cosa muy antigua en la historia del mundo. Nació con la extensión de la doctrina cristiana en la vieja Europa, frente al viejo concepto de la disolubilidad matrimonial, que se había venido practicando en la antigüedad.

La vieja Grecia y la antigua Roma tenían el concepto de la unión y el de la disolución matrimonial, cuando razones especiales obraban para que esta unión no siguiera existiendo.

Los patricios romanos tenían una institución que llamaban *confareatio*, es decir, de consagración del matrimonio; y después existía lo que se llamaba la *difareatio*, o esa la disolubilidad del vínculo. Tomaba ese nombre porque en la celebración de la boda se partía una torta de harina. En cambio, para los plebeyos existía la *coemptio*, que daba la idea de compra; era un acto por el cual se significaba que el hombre compraba a la mujer, y en ese acto entregaba monedas. De entonces ha provenido aquella costumbre vieja de la entrega de las arras, que se ha mantenido últimamente en España y en algunos países donde aun se acostumbra entregar un objeto, como señalando simbólicamente la adquisición de la mujer. Es decir, que se consagraba al hombre como ser dominante y a la mujer como elemento adquirido.

¡Qué lejos estamos, señor presidente, de aquellas épocas! Sin embargo existía la unión y la desunión matrimonial. Más, señor presidente: existía la institución del repudio, por la cual un cónyuge podía alejarse del otro cuando hubieran existido causas esencialmente graves. Pero vino el Derecho Canónico, respaldado por la actividad cristiana, y sentó el principio de la indisolubilidad matrimonial para afirmar en aquella época el concepto rígido, noble y firme del aseguramiento del núcleo familiar. Pero como se sabía que la realidad es más fuerte que la ley, que los hechos son más fuertes que las normas, que los sentimientos son más apasionados que cualquier otro ligamen, se creó lo que entonces se llamó separación *quod ad torum et mensam*, es decir, separación respecto del lecho y de la mesa, que es lo que nosotros llamamos en nuestra legislación divorcio o separación de cuerpos. Y ése fué el concepto del divorcio canónico: permitir la separación de los esposos, pero no la disolubilidad del vínculo matrimonial y con ello prohibía la realización del nuevo matrimonio.

Los concilios sancionaron posteriormente estos conceptos, el de Letrán en 1215 y especialmente el de Trento en 1562. Aparte diré que la iglesia griega y la iglesia ortodoxa y todas las otras religiones no cristianas aceptan la disolubilidad del vínculo matrimonial por adulterio y otras causas graves.

Pero vino la Revolución Francesa y, consecuente con la concepción del Estado como contrato social aplicada a los distintos órdenes del derecho público, como también del derecho privado, se llegó a concebir —exageradamente por cierto— el matrimonio como un contrato entre dos partes. Un simple contrato de derecho privado; y así, desde el punto de vista de los enciclopedistas, lo que la voluntad de las partes unía, esa misma voluntad podía desunir. Entonces fué cuando se aceptó el principio del matrimonio como un contrato y el principio de la disolución del vínculo matrimonial como una ruptura de ese contrato.

Evidentemente, esta tesis fué cruda, fué dura, porque vinculada a un concepto materialista de la vida, no veía en el matrimonio nada más que un simple contrato, pasando por alto los numerosos sentimientos que hacen al afecto entre las personas, el amor a los hijos, el sentimiento de defensa entre los miembros del núcleo familiar, y los altos valores espirituales que condicionan la vida de la familia.

En realidad, señor presidente, el matrimonio es un convenio entre partes, pero es también una institución de derecho público. La familia es la célula más importante de la sociedad, que debe ser protegida esencialmente por el Estado contra toda acechanza y contra cualquier contingencia, porque cuando se desune la familia se destruye esencialmente la sociedad.

Porque, señor presidente, resulta muy importante señalar que la disolubilidad judicial de un vínculo matrimonial, no es sino la consagración de un estado de ruptura ya producido; no es la ley la que produce la ruptura; la ruptura ya está realizada; allí no existe matrimonio sino por una ficción jurídica; la familia no existe; la familia está destruida, y en este caso, la ley, cuando acepta la disolución del vínculo matrimonial, está abriendo nuevas esperanzas para que se cree lo que ya no existe; lo que está en la nada; lo que está desquiciado o muerto. Para eso se crea la disolubilidad: la disolubilidad de una ficción, de una realidad que ha desaparecido, para crear, si es posible, una nueva y bella realidad.

El código de Napoleón de 1804 establecía el principio de la disolubilidad del vínculo matrimonial, el que fué suprimido poco después y restaurado por una ley de nombre Naquet en 1884.

Las discusiones que en esa época se hicieron alrededor de esta ley Naquet fueron trascendentes, pues allí se agotaron extraordinariamente los argumentos que hacen a una y a otra posición. Y en nuestro país, ocurrió también lo mismo, en el año 1902 cuando se discutió en la Cámara de Diputados esto mismo que ahora estamos considerando.

Allí se produjeron debates importantes, donde se hicieron ver las dos posiciones, y en esa

oportunidad se dijo cuánto pudo expresarse al respecto. Para mayor ilustración, a los informes de aquella época me remito, en consideración a la brevedad del tiempo en que me he propuesto fundamentar el despacho.

Solamente deseo señalar, señor presidente, lo siguiente, para que se note cuál es la posición legislativa argentina frente a la legislación comparada sobre esta materia: tienen la separación de cuerpos exclusivamente, al igual que nuestro país, España, Italia, Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, Paraguay e Irlanda. Adoptan el sistema de la separación de cuerpos para los católicos y la posibilidad de divorcio para los demás: Austria, Polonia y Yugoslavia. Consagran el principio del divorcio y la separación de cuerpos para todos, es decir, para los que lo deseen, los siguientes países: Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Checoslovaquia, Suiza, Turquía, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Venezuela, la mayoría de los Estados de los Estados Unidos de Norte América, la Unión Sudafricana y en el Canadá, donde la legislación sobre divorcio compete a las provincias internas, la mayoría de las cuales son divorcistas.

Consagran el divorcio absoluto solamente Grecia, Rumania, Japón, China, Méjico, Honduras, El Salvador y Rusia.

Como vemos, señor presidente, nosotros pertenecemos con España y con Italia a un pequeño número de países que todavía en el mundo está manteniendo una legislación de tipo antidivorcista, es decir, contraria a la disolución del vínculo matrimonial.

Pero voy a señalar un aspecto que resulta muy importante, señor presidente. En todas estas legislaciones a que me acabo de referir, se halla contemplado con espíritu amplio el régimen de la nulidad del matrimonio. Así, Brasil, aun cuando pertenezca a una legislación que no acepta la disolución del matrimonio, remedía en la práctica todas las dificultades por vía de las nulidades.

Pero esta posibilidad no la tenemos nosotros y diré el porqué: la ley de matrimonio civil actualmente vigente entre nosotros, fué sancionada recién en 1888 y fué modificatoria del régimen de matrimonio creado por Vélez Sársfield en 1871. Por lo tanto, el régimen del matrimonio creado por Vélez Sársfield, no es el que nos rige en la actualidad, ya que el codificador creó solamente el matrimonio religioso, dejando libre su realización a los sacerdotes de las respectivas iglesias a cuyos credos pertenecían los contrayentes. De manera que todos los recaudos estaban dirigidos por el Código Civil para ser regidos por la autoridad eclesiástica.

Ahora bien, Vélez Sársfield adoptó como principio para las nulidades dentro del matrimonio,



la orientación canónica vigente en su época, pero en 1917, la legislación canónica varía y amplía el régimen de dispensas en lo que a la disolución del vínculo matrimonial se refiere. Vale decir, que hemos sido fieles a un régimen de nulidades que hacía al viejo derecho canónico y no a las nuevas modificaciones introducidas luego de 1917. Nuestro régimen, por lo tanto, es más riguroso y absoluto que el del derecho canónico vigente.

Y bien, señor presidente: hombres antidivorcistas como Juan Carlos Rébora, autor del libro sobre derecho civil *La Familia*, y Héctor Lafaille, en su *Derecho de Familia*, curso de derecho civil, que no son partidarios de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, afirman que el vínculo debe ser indivisible dada la idiosincrasia de nuestro pueblo, pero sugieren —escuchen bien, los señores senadores— que para los casos insalvables, podía buscarse la solución por medio del régimen de la nulidad del matrimonio. Quiere decir que aun estos autores, que aceptan que el matrimonio es indisoluble, al formular dicha apreciación, ponen de relieve la necesidad evidente, imperiosa e impostergable de resolver por ese medio situaciones realmente lamentables, que no ocurrirían si tuviéramos un régimen ajustado.

Numerosos antecedentes parlamentarios señalan la necesidad de la reforma que tratamos. A lo largo de la vida parlamentaria de nuestro país, se han presentado numerosos proyectos. Entre ellos, el del diputado Balestra, de 1888; del diputado Olivera, de 1901; del mismo diputado, de 1903; del diputado Palacios, de 1907; del diputado Conforti, de 1911; del diputado Palacios y otros, de 1913; del diputado Pesenti, de 1913; del diputado Bravo y otros, de 1917; del diputado Bard, de 1922; del diputado Di Tomaso y otros, en 1922; del senador Bravo, en 1925; del diputado Giménez y otros, en 1933; del diputado Ruggieri, en 1938; el del diputado Absalón Rojas, en 1946. Y, a su vez, otro antecedente no muy viejo, señor presidente: el de hace pocos años, el del 19 de mayo de 1949, que resulta altamente significativo, porque este proyecto pone en descubierto la falta de orientación precisa de la minoría en la Cámara de Diputados de la Nación cuando anoche no ha votado afirmativamente la iniciativa auspiciada por el bloque peronista de la Cámara de Diputados que propiciaba la disolubilidad del vínculo matrimonial. Justamente, el 19 de mayo de 1949, el entonces diputado nacional doctor Rodríguez Araya, y otros, presentaron un largo proyecto sobre el divorcio con disolubilidad del vínculo matrimonial, a la Cámara de que formaban parte.

Como vemos, señor presidente, basta que el peronismo adopte una actitud en el país para que no se discuta la idea, para que no se discuta la bondad de la iniciativa, sino para que se esté en contra de los principios que el peronismo consagra como conquistas. Basta que el

peronismo adopte una posición para que los que no conjugan con su pensamiento, adopten la posición contraria. Pero eso nos alegra, señor presidente, porque evidentemente somos la brújula que marca una dirección frente al impulso del pueblo que nos orienta en esa misma dirección. (*Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.*)

Y los demás, señor presidente, son aquellos que marchan de rezago, comentando sobre nuestras resoluciones y sobre la bondad de los principios sobre los que nos afirmamos. El peronismo, en esta hora, asume una responsabilidad honda, sí, señor presidente: la de consagrar la disolubilidad del vínculo matrimonial, frente a causas graves, que envilecen la familia.

El diputado Barroetaveña decía en la Cámara de Diputados en 1902: «Cuando oigo decir a los adversarios del divorcio que si se admite en la República Argentina, correrá peligro nuestra sociabilidad, que la moral de las familias se derrumbará, que la corrupción invadirá todas las capas sociales, que la ley de divorcio será una especie de rompan filas de todos los matrimonios, donde los maridos y las esposas saldrán en busca de aventuras amorosas, olvidando el respeto recíproco y a la sociedad en que viven, desprendiéndose de súbito del amor a sus hijos; es decir, concluyendo esta desastrosa institución del divorcio, en un minuto, con los vínculos más poderosos que unen a los hombres en sociedad; cuando oigo predicar todas esas enormidades contra la ley de divorcio, se me ocurre dirigir la mirada a los pueblos más cultos, morales y civilizados de nuestro tiempo, y pregunto: si hay allí familias, si hay allí sociedad, si está consolidada la organización social; y encuentro que si aquellos pueblos están a la cabeza de la civilización por su poderío y por sus leyes, es porque está perfectamente garantizada la moralidad de la familia, el respecto a la mujer, y el amor a los hijos.»

Sé que muchos se plantearán un problema de conciencia, pero creo que no deben tenerlo. El problema de la disolubilidad o indisolubilidad del vínculo matrimonial, que no es desde nuestro punto de vista legislativo un problema religioso, no puede plantear a nadie una situación de esta naturaleza. Se trata de un remedio para que lo use quien lo necesite, y no de imponerlo a quienes no lo necesitan.

Cuando se habla de una institución hay que mirar primero cómo está reglamentada y cómo están señalados sus términos, y cuando ella está concebida en términos tolerantes, democráticos, amplios y respetuosos, donde ninguno puede sentirse herido en su interior y donde nadie está obligado a cumplir con sus preceptos, nadie se debe considerar lesionado. Cuando cualquiera personalmente pueda sentir un escrúpulo debe pensar, que cuando se desenvuelve

en el rol de legislador, está en esa función mirando a toda la Nación y no solamente su interés personal ni su pequeña o grande concepción particular sobre la materia. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

De más está decir que el anteproyecto de Bibiloni consagraba la disolución del vínculo matrimonial. En el artículo 82 de su anteproyecto decía que «ejecutoriada la sentencia de divorcio absoluto, queda disuelto el matrimonio. La esposa no podrá contraer nuevas nupcias antes del plazo establecido en el artículo 53».

El proyecto que consideramos modifica, evidentemente, los artículos 64 y 81 de la actual ley de matrimonio que establecen lo siguiente: el 64 dice: «El divorcio que este Código autoriza consiste únicamente en la separación personal de los esposos, sin que se disuelva el vínculo matrimonial.» Y el 81 establece: «El matrimonio válido no se disuelve sino por la muerte de uno de los esposos.»

En cambio, el régimen de disolubilidad del vínculo matrimonial que se propone está contemplado por una disposición concebida en los siguientes términos: «También, transcurrido un año de la sentencia que declaró el divorcio, cualquiera de los cónyuges podrá presentarse al juez que la dictó pidiendo que se declare disuelto el vínculo matrimonial, si con anterioridad ambos cónyuges no hubieren manifestado por escrito al juzgado que se han reconciliado. El juez hará la declaración sin más trámite, ajustándose a las constancias de los autos. Esta declaración autoriza a ambos cónyuges a contraer nuevas nupcias.

«Cuando el divorcio se hubiere declarado con anterioridad a esta ley, el derecho a que se refiere el apartado precedente podrá hacerse valer a partir de los noventa días de la vigencia de la misma y siempre que hubiese transcurrido un año desde la sentencia.»

No se trata del sistema de divorcio absoluto, ni tampoco el que se concede por mutuo consentimiento sin causa, ni tampoco a su vez el que se concede a simple pedido de la esposa, como lo es en la legislación uruguaya y otras.

En nuestro caso, se trata sólo de dar el efecto de la disolubilidad del vínculo, como consecuencia de una separación judicial, sin que haya habido avenimiento.

Como consecuencia de la disposición que estamos comentando, la disolución del vínculo matrimonial que se instituye se produce sobre la base de los siguientes presupuestos, que escuetamente paso a señalar para no distraer por más tiempo la atención de las señoras y señores senadores:

1º La disolubilidad del vínculo matrimonial resulta como consecuencia del juicio de divorcio o separación de cuerpos, vigentes en el Código

Civil, y siempre que no hubiese reconciliación posible.

2º Cualquiera de los cónyuges separados por divorcio, conforme a las actuales causales contenidas en el artículo 67 de la ley de matrimonio civil, puede pedir la disolubilidad del vínculo matrimonial, siempre que no hubiese habido reconciliación ante juez, pasado un año de la sentencia firme de separación.

3º En el caso de los juicios de divorcio ya pronunciados, cualquiera de los cónyuges podrá pedir la disolución, en las mismas condiciones ya señaladas, transcurridos noventa días de la vigencia de la ley. Deberá haber transcurrido, a su vez, un año desde la sentencia de separación dictada.

4º En todos los casos, constatado en los autos de separación judicial que no ha habido manifestación expresa de existir reconciliación anterior, el juez acordará la disolución, pudiendo en tal caso los cónyuges libres contraer nuevo matrimonio.

5º Siendo la disolución de matrimonio que se legisla una consecuencia o efecto de la sentencia de separación judicial, el problema de la tenencia de los hijos se regirá por las normas vigentes sobre la materia.

6º La ley argentina se aplicará tanto a los matrimonios celebrados y disueltos en el país como a los que celebrados en el extranjero se disolviesen en el país.

7º Como consecuencia de esta sanción queda derogado el principio contenido en los artículos 64 y 81 de la ley de matrimonio civil.

Como presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Técnicos, en nombre de la cual informo este proyecto, señalo que nuestra posición favorable a la disposición que estamos comentando se basa esencialmente en las siguientes razones:

1ª La disolubilidad del vínculo matrimonial se impone cuando se han separado judicialmente los esposos, sin voluntad de unirse, transcurriendo un tiempo más que prudente sin deseos de reconciliación y frente a un matrimonio desquiciado;

2ª El divorcio se impone en estos casos como una imperiosa necesidad y como un remedio, pues si bien existe un vínculo matrimonial impuesto por la ley, el concepto y la realidad de la familia no existen, pues han desaparecido en el hecho;

3ª Se protege con ello esencialmente la familia, célula social amparada por la Constitución Justicialista, y a la niñez, frente a los malos ejemplos de un matrimonio desquiciado y de una familia prácticamente inexistente;

4ª Se da un remedio necesario a quienes lo necesitan imperiosamente, y no se afec-

ta para nada con ello a quienes no lo necesitan, o necesítándolo, por sus convicciones, no desean hacer uso del mismo, pero que por ello no tienen el privilegio de imponer tal conducta a los demás;

- 5ª Porque no se resuelven los grandes ni los pequeños problemas de los pueblos pretendiendo ignorarlos, sino afrontándolos con soluciones prudentes y ajustadas a la medida de las necesidades que los mismos plantean.

Y, finalmente, porque la realidad es más fuerte aún que la propia legislación y, pese a la ley en vigor, miles y miles de personas necesitan reencauzar sus vidas frente a nuevas esperanzas y a quienes la Argentina justicialista no puede desoir.

Estas son las razones, señor presidente, que han movido a la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos a despachar favorablemente este proyecto de ley que someto a la consideración de las señoras y señores senadores, en la seguridad de que nuestro voto de hoy habrá de enaltecernos frente al futuro, que la sociedad argentina nos lo habrá de agradecer y que los que hoy nos critican, mañana viendo las bondades de la ley, nos repararán en la ofensa que pudieran hacernos. Nosotros, con la frente alta y con el pecho ennoblecido por los mejores sentimientos, habremos de votar esta ley porque tiene un grande principio de justicia social y porque hace esencialmente a nuestra doctrina peronista y al líder máximo de nuestra argentinidad, el general Perón. Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados Las señoras y los señores senadores rodean y felicitan al orador.*)

**Sra. Castañeira de Baccaro.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

**Sra. Castañeira de Baccaro.** — Señor presidente: el Código Civil, hecho para una época que hemos dejado tan atrás en «esta hora de los pueblos», y que fué redactado con un criterio individualista, tan superado con el Justicialismo de Perón, necesita muchas reformas, cuando no una reestructuración total, que este Congreso peronista ha de dar al país siguiendo las inteligentes directivas de nuestro general y con la mística de la doctrina que nos enseñó a conocer, defender y respetar con nuestro fanatismo de mujeres Eva Perón.

La iniciativa que está considerando esta Honorable Cámara, y que ha remitido el Poder Ejecutivo, viene a corregir una estructuración legislativa evidentemente anacrónica. Los artículos del Código Civil referentes a la declaración de la ausencia y del fallecimiento presunto han merecido la crítica de autorizados

juristas argentinos y de nuestra reiterada jurisprudencia. El miembro informante que me ha precedido en el uso de la palabra ha abordado el tema desde el punto de vista doctrinario, aspecto que no he de tocar. Como mujer y legisladora peronista quiero referirme al aspecto social de esta parte del proyecto que se refiere a la ausencia con presunción de fallecimiento.

Si en verdad hoy, con los medios rápidos de comunicación y con el contralor del registro civil de las personas, es muy difícil la desaparición de un individuo que signifique el abandono total de sus intereses y obligaciones surgidas de la convivencia social, hay que reconocer también la necesidad de resolver en forma justa las situaciones que esa ausencia trae aparejada y a las que la sociedad tiene interés de poner fin.

Los plazos establecidos por el código vigente son demasiado amplios. Ellos obligan a mantener un estado de inseguridad y de duda innecesario. El proyecto acorta los mismos en forma razonable; asegura los derechos de los sucesores; disuelve el vínculo matrimonial al contraerse nuevo matrimonio, para el que se autoriza al cónyuge del ausente. En caso de reaparición del ausente mantiene la validez del nuevo matrimonio.

La Honorable Cámara de Diputados modificó el artículo 31 del proyecto, extendiendo la disolución del vínculo matrimonial en los casos de divorcio cuando hubiere transcurrido un año de la sentencia que lo declaró, si con anterioridad ambos cónyuges no hubieren manifestado por escrito al juzgado que se han reconciliado. Ello autorizará a ambos cónyuges a contraer nuevas nupcias.

Indudablemente, señor presidente, esta importante modificación peronista de la legislación vigente es una franca manera de encarar la realidad. La hipocresía oligárquica mantenía cerrada una situación que no engañaba a nadie, y los esposos dispuestos a separarse definitivamente por causas que no es el caso de analizar resolvían en el extranjero lo que nuestra ley no quería ver. Es la enseñanza del avestruz, tantas veces recordada, que esconde la cabeza para ignorar lo que sabe ocurre a su alrededor.

La solución buscada de prestado en otros países complicaba las cosas y traía aparejada una serie de consecuencias irregulares que se prolongaban a los hijos del segundo matrimonio y a la segunda esposa que, sin ignorar la situación de divorciado de su esposo, que la sociedad respetaba, tenía que soportar las anomalías que la ley le imponía.

La ley peronista es clara y valiente y afrontamos la verdad con la razón de nuestra justicia social.

Nuestra Jefa Espiritual de la Nación, Eva Perón, al hablar de las leyes anacrónicas del

país, que vamos borrando y mejorando paulatinamente, nos decía que «no hay peor tiranía que la de la ley cuando es inadecuada a las necesidades del conglomerado social».

El segundo Plan Quinquenal fija como objetivo fundamental de la acción legislativa «estructurar un ordenamiento jurídico simple, objetivo, estable y perfectible, sobre la base de los principios rectores de la Constitución Nacional Justicialista», y, como objetivo general de la legislación social, lo siguiente: «La legislación social afianzará el cumplimiento de los objetivos del presente plan a fin de lograr la vigencia permanente y absoluta de la justicia social, que otorga a cada persona su derecho en función social.»

Es el pensamiento siempre presente de Perón, quien en 1947 nos decía: «Hemos de poner al día nuestros códigos de procedimiento y de fondo; hemos de dar al país una nueva legislación más a tono con los días que vivimos. Es anacrónico que en estos días en que se está intentando la navegación estratosférica, en que se emplean treinta horas para venir de Europa a Buenos Aires, empleemos un código que fue hecho para la navegación a vela, cuando se tardaba seis meses en llegar del continente europeo.»

Este aspecto del proyecto de ley al que me he referido tendrá su proyección en nuestra sociedad, y como los demás artículos de esta iniciativa, será un jalón más de la obra peronista en este camino de construir una legislación justicialista para la Nueva Argentina de Perón y Eva Perón.

Nada más. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Herrera.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Herrera.** — Señor presidente. Deseo pronunciar pocas palabras para fundar mi voto favorable a la iniciativa que está en consideración. Ante todo, quiero dejar sentada mi coincidencia sin reservas con la totalidad de las innovaciones propugnadas en el proyecto de que se trata, así como mi adhesión a los conceptos que han vertido los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra, quienes no sólo han fundamentado con claridad y amplitud estas reformas trascendentales, sino que las han ubicado con precisión en el plano de la Doctrina Nacional, de la que en definitiva, son su consecuencia.

Como hombre del pueblo, que ve las cosas y las siente como tal, quiero destacar la significación especial de la institución del bien de familia, puesto que sus previsiones están destinadas a proyectarse de manera indeleble en el terreno social. Porque me impresionaron profundamente, conservo imborrables en mi recuerdo aquellas palabras pronunciadas por el

entonces coronel Perón, allá por el año 1944, afirmando que «la vivienda no es una prebenda del hombre que pueda disponer de medios, sino uno de los elementales derechos del hombre del pueblo».

Ya en el gobierno tampoco —como de costumbre— fueron olvidadas por el general Perón. Ahí está presente la magnífica obra realizada, que ha posibilitado el acceso a la vivienda propia a todo el pueblo trabajador. En el pasado, esto sólo era un privilegio de determinadas clases y todos sabemos que no lo desaprovecharon.

Facilitado primero, al hombre de trabajo la propiedad de su vivienda, viene ahora, en este segundo paso, a asegurarse la posesión del techo a su familia para el caso fortuito pero inevitable de su desaparición. Este momento inexorable desataba antes, en los hogares modestos, un drama intenso y real. La casita levantada con esfuerzos y sacrificios, en la que se habían volcado los ahorros y las ilusiones de la familia, estaba condenada las más de las veces a desaparecer, para poder solventar, con su venta, el pago de los impuestos y gastos sucesorios. La verdadera función social de la propiedad, en su más alto sentido, es la que le atribuye el proyecto en consideración, en las condiciones que en el mismo se establecen.

Para mí señor presidente, concurren en esta iniciativa la suma de los postulados justicialistas dirigidos a obtener, no sólo el bienestar y la felicidad de los individuos, sino también a hacer de éstos algo más que entes productores de riqueza. Todo hombre alberga en lo más profundo de su yo el temor de que a su muerte puedan caer los suyos en el desamparo. Al asegurársele, mediante esta nueva innovación peronista, que la muerte no habrá de significar la liquidación de su esfuerzo, se le libera de una preocupación preponderante que actúa sobre sus potencias como factor negativo, y se lo posibilita para encauzarlas hacia nuevas y más altas realizaciones.

Por esto, señor presidente, y porque estoy convencido de que el proyecto de que se trata está impregnado de un profundo contenido de justicia social, humana y típicamente peronista, y se dirige de manera muy especial a garantizar los frutos del esfuerzo del pueblo trabajador, voy a dar mi voto favorable para su sanción. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sra. Pineda de Molins.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la señora senadora por la provincia de Buenos Aires.

**Sra. Pineda de Molins.** — Señor presidente, se ha significado desde las bancas que las mujeres peronistas ocupamos en el Senado de la Nación, la trascendental importancia de la legislación de la Nueva Argentina, especialmente luego de sancionada la Constitución Justicialista de 1949.

Hemos insistido en la virtual inspiración del pensamiento de Eva Perón para la solución de todos los problemas de la madre y del niño.

Es con verdadera satisfacción que tomo parte en este debate, por conocer prácticamente, por mi labor en institutos de menores, la situación en que se encontraban antes de Perón y el anhelo general de estas normas, que hoy nos llegan en forma orgánica por mensaje del Poder Ejecutivo.

El segundo Plan Quinquenal, en su capítulo I, «Acción Social», prevé la acción estatal dirigida al perfeccionamiento de la niñez y de la juventud.

Esta constante preocupación es mayor cuando el niño y el joven llevados por condiciones ambientales negativas han transgredido las normas jurídicas.

Las reglas contenidas en los artículos 1º y 13 del despacho constituyen un régimen especial en el que se contemplan todas las posibilidades de rehabilitación del adolescente y del joven que delinque. Utilizar los mismos medios en dos etapas completamente distintas de la vida del hombre y, sobre todo, permitir que las mentalidades jóvenes sean influenciadas por los elementos peligrosos inadaptados, a veces reincidentes, y siempre malos consejeros, ha sido un grave error de incomprensión que ha malogrado las mejores intenciones.

Las disposiciones sobre el estudio de la personalidad del menor, el establecimiento del régimen de la libertad vigilada, la solución de la minoridad abandonada o falta de asistencia, el tratamiento adecuado para conseguir el mayor grado de adaptabilidad social y aptitud para el trabajo, la privación de libertad en institutos especiales, el tratamiento adecuado en caso de anormalidad física, psicológica o mental dicen de la economía del proyecto encaminado a solucionar los delicados problemas que inciden sobre la conducta del adolescente y del joven.

De esta forma, partiendo de la base de la etapa evolutiva que constituye la adolescencia y la juventud, se excluye al menor del ámbito penal, permitiendo su desarrollo en el ambiente más propicio y favorable. Una vez más la legislación peronista encara la realidad de la vida y la trasunta en normas jurídicas que no son sino el espíritu del pueblo hecho ley.

Por el artículo 14 se eleva la edad mínima para contraer matrimonio, que por la ley de 1888 era de 12 años cumplidos para la mujer y 14 para el hombre, a 14 y 16 años, respectivamente.

Al elevar las edades mínimas para contraer matrimonio, se parte de la base del conjunto de responsabilidades que significa la fundación de una familia. No solamente la capacidad física de procrear sino la necesidad de proteger en su futuro desenvolvimiento ese hogar, cé-

lula de la patria y crisol de virtudes, evidencia la preocupación del gobierno del general Perón hacia la institución base de nuestra sociedad: la familia.

Los artículos 34 a 50 configuran una institución jurídica de primerísima importancia, el bien de familia, que contribuirá a la consolidación del ente social, cuya vigorización se propone la concepción peronista del Estado y la sociedad. La Constitución Justicialista de 1949, en su artículo 37, prevé la «preferente protección» de la familia, y el Plan Quinquenal, entre sus objetivos especiales, señala las medidas generales que aseguren el cumplimiento de los derechos de la familia.

La protección de la familia se concretará en la adopción de medidas particulares de protección y fomento que posibiliten la formación del patrimonio familiar, y en las exenciones impositivas, con el justo criterio de cargas de familia. Con estos mismos conceptos hemos votado la ley de colonización, que organiza la formación y mantenimiento en el tiempo y en el espacio de la unidad económica familiar. Este proyecto es el resultado de serios estudios realizados por los organismos técnicos respectivos, tratando de substraer una parte del patrimonio que se forma con el trabajo de todos —aunque esté a nombre del jefe de familia—, como previsión de las contingencias de la vida, de la ineptitud y aun de la inconducta del titular de los bienes.

Una vez constituido el bien de familia, individualizado el inmueble urbano o rural en el registro inmobiliario correspondiente, se substraer esa parte del patrimonio y su fruto al movimiento económico, impidiendo que las explotaciones prósperas sean llamadas a dividirse, de acuerdo con el derecho común, por muerte de uno de los cónyuges.

Tratándose de viviendas, la familia debe vivir en ella constituyendo el hogar, el verdadero hogar, donde esté siempre encendido el fuego de los amores recíprocos; y si se trata de campo, la familia debe labrarlo con su propio trabajo, formando el propio lar, arraigo de toda familia campesina. La inembargabilidad y la inalienabilidad, perfectamente condicionadas al fin que se proponen, permiten la defensa del bien de familia, pero también la posibilidad de transmitir el bien, previa desafectación, cuando concurren las condiciones que se señalan. Se favorece la constitución y la transmisión del bien de familia por causa de muerte, con exención generalizada de los impuestos.

Toda la economía del articulado coincide en proteger el trabajo armónico del grupo familiar, excluyendo de la desgracia económica, de la imprevisión y hasta de la muerte el resultado del sacrificio de muchos seres, permitiendo la continuidad de las explotaciones, que redundará en

beneficio, no solamente de la familia protegida, sino de la economía general.

Señor presidente: la revolución peronista ha traído felizmente para la familia argentina su tan merecida felicidad. La Constitución Justicialista de 1949 y el segundo Plan Quinquenal de gobierno rodean de las mayores garantías al grupo familiar, asegurando así su destino nobilísimo de mantener los valores morales y espirituales del hogar, donde la patria ve sus futuras generaciones.

Este proyecto de ley, en su preocupación por el niño —«único privilegiado de la patria»—, como han querido nuestro gran conductor el general Perón y nuestra querida Jefa Espiritual señora Eva Perón, se inspira en los eternos beneficios de la justicia, nutriéndose en el amor, «único que construye».

Este niño de quien se dijo: «El niño es nuestro nuevo mundo»; de quien Nauman expresó: «La historia de los pueblos ha de decidirse en la habitación de los niños». Este niño a quien todas las miradas se dirigieron siempre para traducir en sanas loas o proyectos sabios el honrado problema de su destino, no tuvo en la legislación argentina la atención que hoy, merced al Justicialismo, recibe como una realidad más del anhelo de construir una patria grande y un pueblo feliz.

El adolescente, cuyo paso vacilante en un sendero tortuoso y oscuro lo hizo tantas veces caer en medio de los vicios y la delincuencia, provocando, pues, el abandono de una sociedad fría, ajena a la realidad de la patria, ese adolescente halla hoy su camino bañado de claridad en esta aurora de reivindicación, que compartimos con emoción y patriotismo.

Señor presidente: las modificaciones sobre la ausencia con presunción de fallecimiento, el bien de familia y la indivisión forzosa de bienes hereditarios, hacen de este proyecto de ley uno de los más trascendentales de nuestra legislación peronista, al llegar al seno mismo de la familia argentina.

La familia es la célula social; la mujer, su fundamento en ella. Eva Perón, la extraordinaria mujer que es bandera inmortal de nuestras huestes femeninas, decía en 1946: «En los hogares argentinos de mañana, la mujer, con su agudo sentido intuitivo, estará velando por su país al velar por su familia.» Y agregaba: «No será tanto en las escuelas, sino en los hogares donde se ha de formar la nueva humanidad que quiere el Justicialismo de Perón.»

Soñaba Eva Perón en aquellas horas febriles de la revolución, en aquellas jornadas envueltas en la llamarada de su fe, soñaba con el verdadero hogar argentino, el hogar dignificado, legalmente constituido, económicamente independizado, sencillo y bueno, con padres responsables e hijos que posean las virtudes que necesita el pueblo para cumplir sus destinos.

Desde el principio de los tiempos se proclamó la importancia del hogar, el papel fundamental de la familia y se llenaron páginas de loas a la madre, que no pasaron sin embargo de allí, negándose en la práctica toda la realidad efectiva.

En la lejana Esparta se formó, durante el gobierno de Licurgo, la escuela de las grandes mujeres lacedemonias. Ellas aprendieron la importancia que para el Estado tiene la mujer al tener como misión: «Educar al niño y formar al hombre.»

En nuestro pueblo, durante un siglo de legislación la familia vivió en el olvido. La mujer debió esperar este amanecer glorioso del peronismo, y al genio de Perón y al amor de Eva Perón les debemos hoy, las mujeres argentinas, sin distinción de ideologías o de credos, el momento cumbre de nuestra dignidad.

Los derechos cívicos y políticos, la recuperación de sus dignidades, el reconocimiento a sus valores morales y espirituales, las posibilidades en los campos del trabajo, de la ciencia y del arte; la reconquista de su puesto de honor en el hogar, en la sociedad y en la Nación, son hechos exclusivos del gobierno del general Perón, defendidos por aquella extraordinaria mujer que es nuestro símbolo más puro: Eva Perón.

En esta Nueva Argentina cada ley es como un pilar más en sostén del monumento a su grandeza. Un pilar sólido e indestructible, levantado por quienes, interpretando al genio, tienen la felicidad inmensa de compartir sus días de gloria.

Señor presidente: nuestra insigne abanderada dijo un día: «Perón es nuestra bandera y a las banderas se las sigue hasta la muerte o no se las sigue.»

Nosotras, las mujeres peronistas que llevamos hoy por los senderos patrios el emblema redentor que nos legara Eva Perón en su partida a la inmortalidad, hemos elegido este camino: seguir esta bandera mientras haya un hálito de vida en nuestros corazones.

Porque estamos seguros, señor presidente, que la patria y su destino tienen un nombre: ¡Perón! Que los senderos de la humanidad sombría y sin esperanzas, serán iluminados únicamente por el rayo del Justicialismo, doctrina de amor que anhela la felicidad del hombre, en la solidaridad y la concordia, haciendo una verdad aquello de «amar al prójimo», si por amor entendemos todo lo que en bien de los demás se puede hacer, en defensa de su vida, de su honor, de su patrimonio espiritual y moral, como la Doctrina Nacional lo afirma y la República lo atestigua en sus horas de paz y de felicidad que goza.

Señor presidente: he querido, al término de esta exposición, referirme expresamente y muy en especial al agregado hecho por la Honorable Cámara de Diputados al artículo 31, en su sesión del día de ayer, y lo hago con honda sa-

tisfacción, ya que con la modificación introducida se da justa y equitativa solución a la aspiración de muchos miles de seres humanos que regularizarán de esta manera su situación legal, para vivir la felicidad que se les ha retaceado hasta ahora por falta de una legislación humana como la presente.

Señor presidente: las legisladoras argentinas, parte integrante del gran movimiento nacional peronista, cumpliendo fielmente el mandato que el pueblo nos confirió, apoyamos decididamente todas las leyes que resuelvan un problema social, que repudien la injusticia y la parcialidad y que signifiquen una protección a la mujer y a la familia.

El artículo 31 de este proyecto, completado con el agregado sancionado en Diputados, contempla dos casos de evidente justicia y los resuelve con claridad jurídica. El matrimonio del cónyuge abandonado, en caso de presunción de fallecimiento, y el nuevo matrimonio de ambos, cuando los tribunales competentes han decretado el divorcio, de acuerdo con la ley civil de matrimonio.

Los dos casos, resuelven la situación de los esposos cuyo hogar ha sido destruido por el abandono, o por la imposibilidad de la vida en común, de acuerdo con las causales legales y la correspondiente comprobación judicial.

Cada vez que podemos apoyar y votar leyes de contenido eminentemente social, como la presente, lo hacemos en nombre de la justicia y solidaridad humanas, con la absoluta seguridad de contribuir a la normalización de casos concretos de problemas familiares, imposibles de resolver sin la autorización que la equidad reclamaba y que se consigue hoy gracias a la iniciativa y energía del movimiento peronista.

Todos nuestros afanes, todos nuestros pensamientos, toda nuestra labor, van dirigidos a la efectiva realidad —y no la declamación— de la justicia, llevándonos así en la tarea humanística y superior de dotar al pueblo argentino de normas jurídicas que hagan su felicidad, que permitan su perfeccionamiento y que alienten sus deseos de superación, dentro de la libertad y la paz.

Nosotras, que ocupamos las bancas del Parlamento argentino gracias a los derechos políticos que nos dió Eva Perón, nos sentimos inspiradas y conducidas por su genio e intuición para la legislación social, y creemos cumplir con su afán de reivindicaciones, una de las cuales, con la aprobación de este agregado, permitirá la vida feliz y legal de muchos matrimonios, que serán verdaderos ejemplos de la Nueva Argentina, obra del genio y el trabajo constante del general Perón. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente.** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

—Eran las 11 y 55.

ANGEL A. BARNETCHE.  
Director del Cuerpo de Taquígrafos.



4

APENDICE

I

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Modificaciones al régimen de los menores y de la familia

PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

—El texto del proyecto de ley es el mismo que se publica en la página 1120.

II

COMUNICACION AL PODER EJECUTIVO

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1954.

*Excelentísimo señor presidente de la Nación.*

Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia para comunicarle que el Honorable Senado, en su sesión de la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre Modificación del Régimen Impositivo Nacional, y ha tenido a bien aprobarlo quedando así definitivamente sancionado en la forma del adjunto pliego.

Dios guarde a vuestra excelencia.

ALBERTO TEISAIRE.  
*Alberto H. Reales.*